

¿Resistencia en familia?

Estrategias y costes de la recuperación de la crisis

Lucía Martínez Virto, Victoria Bogino-Larrambeberé

Universidad Pública de Navarra



SUMARIO

Introducción

1. ¿Hablamos de recuperación? Evolución de las necesidades de las familias
2. Formas de resistencia: evolución de las estrategias de ante la crisis
3. ¿Qué deja la crisis? Los costes y la pérdida de capacidad de resistencia de las familias
4. Conclusiones ¿Qué retos para las políticas sociales? Estrategias para el fortalecimiento de las familias tras la crisis
5. Referencias bibliográficas

Introducción

La crisis económica en España ha tenido un fuerte impacto en las condiciones de vida de los hogares. A través del panel longitudinal de las Encuesta Foessa hemos podido comprobar, a lo largo de estos años, los procesos de exclusión, desigualdad y precariedad a los que iban enfrentándose las familias. En las primeras encuestas, de 2007 y 2011, la destrucción de empleo y la precarización de las condiciones laborales supusieron una importante pérdida de capacidad adquisitiva en muchos hogares. Ante los primeros síntomas de la crisis, las redes familiares y de amistad o solidaridad colectiva desarrollaron un papel amortiguador que frenó algunas situaciones de pobreza. Frente a otros apoyos públicos, las redes familiares eran un colchón rápido que permitía enfrentar las situaciones imprevistas. La naturaleza de su apoyo superaba, además, la ayuda económica, ofreciendo apoyo emocional, vivienda de urgencia o cuidados para la conciliación, entre otras. En aquellos años, también las redes familiares tenían un papel clave en la capacidad que los propios hogares tenían para desarrollar estrategias que contrarrestaran la crisis. De hecho, aquellos hogares que partían de situaciones más precarias contaban con mayor capacidad y autonomía de enfrentar las dificultades y sus apoyos familiares que permitieran superar las situaciones sobrevenidas. Por el contrario, los hogares que partían de situaciones de mayor exclusión encontraban menor capacidad de desarrollar de manera autónoma estrategias de supervivencia y de contar con apoyo informal, convirtiéndose en usuarios potenciales de los recursos de urgencia social.

En el año 2014, los primeros datos económicos que comenzaban a dejar atrás los años de crisis miraban con optimismo al futuro. Sin embargo, la recuperación parecía estar lejos de muchos hogares. En términos de capacidad de apoyo, la extensión de la crisis dejaba familias fuertemente sobrecargadas y se identificaba un progresivo proceso de pérdida de capacidad de ayuda entre las redes de apoyo social (familiares o de amistad). Algunas de las consecuencias de las estrategias emprendidas para superar la crisis también dejaban a los hogares mucho más debilitados de que lo habían estado años atrás. La inseguridad e incertidumbre de la crisis había derivado en fuertes procesos de deterioro de la salud de las

personas, relaciones sociales e incluso, relaciones de convivencia. Por lo que la crisis dejaba a familias y redes tremendamente debilitadas.

Una década después de los primeros síntomas de crisis, los datos macroeconómicos hablan ya de recuperación. No obstante, la naturaleza de los procesos de exclusión identificados a lo largo de estos años alerta de que no solo será necesario recuperar el empleo o mejorar la capacidad económica de las familias. Las formas de resistencia a la crisis dejan otras consecuencias en términos de redes de apoyo, salud, vivienda, bienestar emocional, etc. Por todo ello, son muchas las preguntas que surgen cuando se habla de un cambio de ciclo. ¿Llega la recuperación a las familias? ¿Cómo son sus condiciones de vida? ¿Cómo salen de la crisis? ¿Qué papel tienen las redes sociales y familiares en la recuperación? ¿Explican la capacidad de salida y mejora de las familias? El objetivo de este análisis es profundizar en estas cuestiones y tratar de identificar las condiciones de vida de las familias, sus estrategias y las consecuencias de resistir en estos años, con todo ello pretende conocer cómo pueden enfrentarse las familias a esta nueva etapa.

Para ello, la primera parte del análisis habla de las principales necesidades a las que se enfrentan las familias. Posteriormente se analiza la evolución de las estrategias que han desarrollado en los últimos años. En tercer lugar, se identifican las consecuencias que dejan la crisis económica y la capacidad de resistencia de las familias. Para ello se toma en consideración el estado de salud de las familias, la presencia de consumos, violencia o conflictos, las dificultades en el desarrollo educativo, la capacidad de encontrar apoyo, su relación con las prestaciones o servicios sociales, las consecuencias del aislamiento en términos de exclusión y las barreras de cuidados y conciliación. A través de estos apartados vinculados a las condiciones de vida y resistencia de las familias se identifican algunas estrategias que desde la política social contribuirían al fortalecimiento de los hogares.

1. ¿Hablamos de recuperación? Evolución de las necesidades de las familias

Si ha llegado o llegará la recuperación a las familias es una de las grandes preocupaciones de muchos hogares en España. La percepción de la situación económica y laboral en España parece haber cambiado de tendencia, o al menos en lo referente al aumento del PIB o la reducción de la tasa de desempleo. Sin embargo, el barómetro del CIS indica que la ciudadanía está lejos de sentir y manifestar niveles de confianza como los del año 2007.

Para el 64,3% de la población española el “paro” continúa siendo el problema principal de España. Si bien esta tasa ha descendido en 17 puntos porcentuales, está lejos del 36,5% de la población que lo manifestaba en 2007. Algo similar ocurre con la valoración de la situación económica de España como “buena”. En el año 2018 tan solo el 5,4% de la sociedad española la considera así, un porcentaje positivo con respecto a otros momentos de la crisis económica (1,5% en 2011 o 0,8% en 2013), pero cinco veces menor a la valoración que la ciudadanía hacía en 2007.

Tabla 1. Percepción y valoración de la situación económica y laboral en España (2007-2018)

	Julio 2007	Julio 2009	Julio 2011	Julio 2013	Julio 2015	Julio 2018
“Paro” como problema principal de España	36,5	73,3	81,3	80,9	78,8	64,3
Valoración “buena” de la situación económica en España	26,0	3,9	1,5	0,8	3,5	5,4

Fuente: CIS

Si bien los indicadores de percepción resultan poco precisos para hacer una valoración objetiva de la situación de la economía española, son opiniones que alumbran en cierta medida, cómo los cambios económicos son vividos y percibidos por las familias. La tendencia tanto objetiva como subjetiva de la recuperación ha cambiado de rumbo, pero ¿sienten realmente las familias la recuperación en sus hogares? ¿Cómo se están recuperando? ¿Quién muestra una mayor capacidad de recuperación? Tan solo 2 de cada 10 hogares (21,4%) han señalado que los efectos de la recuperación económica han llegado a sus hogares. Esta media total es tan solo superior en los hogares donde hay dos personas adultas (25,8% en hogares con menores y 23,6% en hogares sin menores). Por el contrario, los hogares unipersonales (19,1%), monoparentales (15,2%) y aquellos con personas dependientes (12,4%) se encuentran por debajo de la media y, por tanto, son aquellos hogares que no han percibido en su hogar los efectos de la recuperación.

Si tomamos al total de hogares que sí ha sentido la recuperación, casi la mitad corresponde a hogares con dos adultos y sin menores (48,0%), el 25,2% a hogares con menores, y tan solo el 2,8% a hogares monoparentales. Es cierto que los dos primeros hogares resultan mayoritarios en la muestra total. No obstante, es en los hogares unipersonales (18,6%), monoparentales (4,2%) y con personas dependientes (15,1%) donde menos se ha sentido la recuperación económica.

Tabla 2. ¿Cree Vd. que a su hogar están llegando los efectos de la recuperación económica? Por tipo de hogar

	Hogar unipersonal	Hogar monoparental	Hogar con menores	Hogar sin menores	Hogar con personas dependientes	Total
Sí	16,1	2,8	25,2	48,0	7,9	100
No	18,6	4,2	19,7	42,3	15,1	100
Total	18,1	3,9	20,9	43,6	13,5	100

Fuente: EINSFOESSA 2018

Por todo ello, la recuperación de la crisis económica muestra tiempos distintos en unas u otras familias. La presencia de menores no parece ser un elemento diferenciador de unos u otros hogares, pero sí lo es la presencia de uno u dos adultos. Mientras que las familias con un solo miembro adulto manifiestan menores tasas de recuperación de la crisis, las familias con dos adultos son las que antes parecen estar sintiéndola. Así mismo, aunque la presencia de menores no parece estar marcando otra tendencia, sí resulta tener un impacto negativo la

presencia de personas dependientes en los hogares. Los cuidados o las formas de convivencia sabemos, de análisis anteriores, que ha podido marcar algunas estrategias de contrarresto o resistencia a la crisis, relacionadas sobre todo con barreras para la incorporación al empleo. Los primeros años de crisis estuvieron muy marcados por necesidades urgentes y básicas relacionadas con la alimentación y, fundamentalmente, con la vivienda y el pago de suministros. En general, también estas situaciones de necesidad se han visto reducidas, un indicador que bien podría también acompañar las tesis sobre la cierta recuperación en las familias.

Tal y como se observa en la siguiente tabla, las principales necesidades de las familias en el año 2018 están relacionadas con el ocio y con los gastos vinculados a la vivienda. En términos generales, el total de hogares entrevistados ha visto reducido el impacto de sus necesidades con respecto a aquellas manifestadas en el año 2013. La imposibilidad de marcharse de vacaciones o los gastos imprevistos continúan a la cabeza de aquellas necesidades manifestadas (36,8% y 32,2%, respectivamente). Esto puede indicar una mejora ligera de la capacidad económica de las familias, pero, sin duda, es un indicador importante de hogares con modestos presupuestos familiares que impiden la capacidad de respuesta ante situaciones imprevistas.

Los costes vinculados a la vivienda ocupan un lugar protagonista en los gastos que deben enfrentar las familias cada mes. Es por ello que suponen buena parte de las preocupaciones de las familias con débiles presupuestos. En general, la tendencia a la baja de la incidencia de las situaciones de necesidad en las familias parece indicar una ligera mejoría con respecto a las situaciones manifestadas en el año 2013. Sin embargo, los datos en 2018 continúan alertando situaciones de necesidad muy grave que pueden poner en riesgo el bienestar de estas familias. En primer lugar, entre el 10-16% de los hogares tiene necesidades no cubiertas en relación con la vivienda. En esta misma línea, los retrasos en el pago de la vivienda (hipoteca o alquiler) están presentes en casi 1 de cada 10 hogares y el riesgo o amenaza a la expulsión de la vivienda todavía está presente en algunas familias (2,9%). Por otro lado, destaca que casi un 6% de las familias manifiesta problemas para hacer frente al material escolar de los menores. En tercer lugar, uno de cada 10 hogares señala no llevar una dieta adecuada. A pesar de la ligera mejoría de este indicador con respecto a 2013, los niveles de necesidad duplican en 2018 aquellos manifestados en el año 2009. Por tanto, nos encontramos ante una situación de alta gravedad. Tan solo las necesidades vinculadas a los cortes de suministros y a la alimentación tienen niveles de necesidad en 2018 mayores a los de 2009. En el primero de los casos las necesidades son ligeramente superiores. No obstante, en lo que respecta a la alimentación, se duplican los hogares que manifiestan no poder llevar una dieta adecuada (5% en 2009 y 9,7 en 2018).

Tabla 3. Situaciones de necesidad por año y sobre el 100 % total de hogares de la muestra

	2009	2013	2018
No salir de vacaciones una semana al año	-	49,4	36,8
No hacer frente a gastos imprevistos	-	37,7	32,2
Retrasos en el pago de suministro	-	-	16,3
Pagos relacionados con la casa	7,9	20,4	15
Avisos de corte de suministro	10,3	13,2	9,9
No llevar dieta adecuada	5	12,4	9,7
Retraso en pago de alquiler/hipoteca	-	-	8
Dificultad de comprar material escolar	-	7,1	5,9
Amenaza o expulsión de la vivienda	3,7	3,7	2,9
No poder independizarse	-	3,2	2,6

Fuente: EINSFOESSA 2009, 2013, 2018

También otras privaciones relacionadas con la salud han sido una constante en muchos hogares con situaciones vulnerables, fundamentalmente, en lo que se refiere a los tratamientos no financiados desde el sistema público de salud. La salud bucal, audífonos o gafas y otros gastos no financiados son clave para iniciar procesos de incorporación social con aquellas personas en situación de exclusión. Sin embargo, de nuevo, en el año 2018, la Encuesta Foessa revela importantes privaciones en salud por tratamientos que no se llevan a cabo por razones económicas. Destacan entre ellas los tratamientos no financiados como dentista (17,9%), prótesis dental (11%) o las privaciones en gafas o audífonos, señalado por uno de cada diez hogares de la muestra. Si bien estas privaciones corresponden a tratamientos necesarios pero no financiados por el sistema público de salud, es importante subrayar que el 3,8% de la muestra presenta privaciones relacionadas con la compra de medicamentos o que el 2,7% no puede financiar los gastos producidos por hospitalizaciones (transporte, comidas, gastos de acompañantes etc.). Estas privaciones son especialmente reseñables en los hogares en exclusión severa. Como se comprueba en la siguiente tabla, suponen la mitad de los hogares que no han recibido atención sanitaria por razones económicas.

Tabla 4. Privación de atención sanitaria por razones económicas, sobre el 100 % total de hogares de la muestra

	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	TOTAL
He requerido atención médica y no ha acudido al médico por no poder pagar el desplazamiento	1,8	20	24,5	53,6	100
Ha dejado de comprar medicamentos que necesita por no poder pagarlos		23,6	24,4	52	100
Ha dejado de tener tarjeta sanitaria	11,3	26,3	21,3	41,3	100
Dejar de comprar medicinas/seguir tratamiento	-	21,9	21,4	56,7	100

Fuente: EINSFOESSA 2018

Por consiguiente, estos datos alumbran resultados muy alarmantes en cuanto a la privación en atención sanitaria, fundamentalmente en lo referido a no recibir atención médica o perder la tarjeta sanitaria. Estos dos casos ponen de manifiesto que el derecho a la salud no es ejercido por algunos hogares debido a las barreras económicas o administrativas que presentan. En estos casos, la privación no es referida a tratamientos o necesidades no financiadas por el sistema de salud, sino a otras barreras de ejercicio del derecho a la salud. En términos generales, dos de cada cuatro hogares afectados por estas situaciones son hogares severos y aproximadamente uno de cada cuatro se sitúan en situaciones de vulnerabilidad o precariedad. Solo en el caso de dejar de tener tarjeta sanitaria se observa cierta presencia de hogares en integración plena. Específicamente esto se presenta en uno de cada diez hogares, lo cual pone de manifiesto que si bien en la mayoría de los casos tiene una estrecha relación con las necesidades económicas, no siempre los factores administrativos están forzosamente vinculados a la pobreza o la exclusión.

Algunas de estas situaciones de necesidad forman parte del conjunto de indicadores que miden la exclusión social a través de esta encuesta. En la línea de lo comentado, estos cuatro indicadores miden (1) los hogares con privación en al menos un bien básico, (2) los hogares que han dejado de comprar medicina, seguir un tratamiento, dietas, podólogo, psicólogo o dentista por problemas económicos, (3) los hogares con acumulación de deudas y (4) los hogares sin independencia residencial por problemas económicos. En la siguiente tabla se pueden constatar aquellas características de las familias que inciden en el riesgo a vivir estas situaciones de necesidad. Cada indicador muestra en la columna de la izquierda los porcentajes verticales, o lo que es lo mismo, la presencia de los factores sociodemográficos sobre el total de hogares que muestra ese indicador. En la columna de la derecha se muestra, por el contrario, la incidencia de ese indicador entre el total de hogares de la muestra que presenta esa característica sociodemográfica. De esta forma el análisis mide tanto aquellos perfiles característicos de estas situaciones, así como, la incidencia de factores sociodemográficos de riesgo en estas situaciones de necesidad económica.

Tabla 5. Indicadores de necesidad económica por factor sociodemográfico de riesgo, sobre el 100% de hogares afectados por el indicador (columna izquierda) y afección del indicador sobre el 100% de hogares con esa característica sociodemográfica (columna derecha)

	Hogares privación de al menos un bien básico ¹		Ha dejado de comprar medicina, seguir tratamiento, dietas, podólogo, psicólogo o dentista por problemas económicos		Acumulación de deudas		Sin independencia residencial por problemas económicos	
Varón	57,3	17,0	59,6	17,3	60,0	3,3	57,5	3,4
Mujer	42,7	24,3	40,4	22,5	40,0	4,3	42,5	4,8
Menos de 29 años	6,5	18,2	6,7	18,4	5,0	2,6	19,2	10,6
De 30 a 44 años	25	18,9	29,7	21,9	37,0	5,3	27,7	4,1
De 45 a 64 años	36,6	18,8	39,0	19,6	47,2	4,6	41,1	4,2
Más de 65 años	31,8	21,3	24,5	16,1	10,9	1,4	12,1	1,6
Ni lee ni escribe	1,8	40,6	1,8	38,2	1,9	7,9	1,3	5,9
Inferior a Graduado Escolar o ESO	32,7	27,3	30,2	24,7	34,7	5,4	26,3	4,3
Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental	32,8	24,5	32,8	24,1	33,3	4,7	25,2	3,7
BUP, FPI, FPPI, Bachiller LOGSE, o superior	26,1	17,5	26,5	17,4	24,5	3,1	27,0	3,6
Diplomado, licenciado o superior	6,6	6,2	8,8	8,2	5,7	1,0	20,1	3,8
Persona sola	32,3	25,0	24,1	18,3	16,2	2,3	24,3	3,7
De 2 a 4 miembros	58,5	16,7	65,1	18,2	62,5	3,3	63,5	3,6
5 y más miembros	9,1	28,3	10,8	32,7	21,4	12,9	12,2	7,5
Trabajando	45,5	15,7	49,6	16,8	43,2	2,8	60,1	4,1
Buscando empleo	13,0	45,4	14,7	50,4	30,2	20,0	12,9	8,9
Percibía alguna pensión/ingresos prejubilación	31,6	20,0	27,1	16,9	15,0	1,8	17,8	2,2
Otras	9,9	26,9	8,5	22,8	11,6	6,0	9,1	4,9
Todos españoles o UE15	78,0	17,1	77,1	16,5	64,8	2,7	75,7	3,3

¹ Hogares que no cuentan con algún bien considerado básico por más del 95% de la sociedad (agua corriente, agua caliente, electricidad, evacuación de aguas residuales, baño completo, cocina, lavadora, frigorífico, teléfono y comer proteínas) y que no puede permitírselo.

Algún extracomunitario o UE ampliación	19,3	37,1	19,6	37,1	27,1	9,9	21,2	8,1
Gitanos	2,8	63,6	3,3	73,0	8,1	35,4	3,1	14,1
Hay algún anciano >65	34,7	20,2	27,9	15,9	15,4	1,7	18,5	2,1
Hay algún menor <18	28,9	19,7	36,7	24,5	55,9	7,2	29,4	4,0
Hay algún joven 18-24	15,2	18,4	18,7	22,3	24,9	5,7	27,4	6,6
Con limitaciones de salud graves o menos grave	21,1	27,1	26,0	32,9	30,2	7,3	21,7	5,5
Hay hogar monoparental	14,3	29,8	16,5	33,4	21,8	8,6	21,6	8,9
Total	100		100		100		100	

Fuente: EINSFOESSA 2018

Los hogares con privación de al menos un bien básico suponen casi dos de cada diez hogares del total de la muestra (19,5%). El perfil mayoritario dentro de los hogares que presentan este indicador está encabezado por un varón, de 30 a 44 años, con enseñanza media y que se encuentra trabajando. Sin embargo, el sexo parece ser un indicador de riesgo ya que tiene una considerable incidencia en el caso de las mujeres. También es un indicador de riesgo para las personas mayores de 65 años, las que tienen un nivel educativo bajo (inferior al Graduado Escolar o ESO) y las que están buscando un empleo. Aunque igualmente resulta especialmente alarmante el porcentaje total de hogares que, pese a estar trabajando, se encuentran en esta situación (15,7%).

En lo referente al origen étnico, los hogares en los que residen las personas de etnia gitana están claramente más afectados por la privación de al menos un bien básico que el resto de los hogares. De hecho, el 63,3% de estos hogares presenta tal privación en comparación con el 17,1% de los hogares de todos españoles o UE-15 y el 37,1% de los hogares de algún país extracomunitario o UE-ampliación.

Asimismo, es importante señalar la incidencia de esta privación particularmente en los hogares unipersonales (25%) y en los hogares de cinco o más miembros (28,3%). Ante esto, cabe presumir que una buena parte de los hogares unipersonales están constituidos por personas mayores de 65 años, puesto que los hogares en los que hay una persona anciana son los que también se han visto más influidos por la mencionada privación (20,2%). En cambio, los hogares en los que hay algún menor de 18 años o algún joven de 18-24 años es factible que se encuentren en hogares de cinco o más miembros, cuya privación alcanza a un 19,7% y un 18,4% de los hogares respectivamente. Por último, se destaca el impacto de este fenómeno en los hogares monoparentales (29,8%) y en los hogares con limitaciones de salud (27,1%).

En relación con esto último, la dificultad de comprar medicinas, seguir tratamiento (dietas, podólogo, psicólogo o dentista) por problemas económicos también está presente en casi dos de cada diez hogares de la muestra (19,1%). Entre ellos está fundamentalmente presente en los hogares en los que residen personas de etnia gitana (73%) y personas de algún país

extracomunitario o UE-ampliación (37,1%), que están buscando un empleo (50,4%) y tienen limitaciones de salud (32,9%). Existe aún más privación de este tipo en los hogares con cinco o más miembros (32,7%) y en los que hay un menor de 18 años (24,5%). Los hogares jóvenes, con personas que tienen menos de 29 años y de 30 a 44 años, son los más afectados por tal privación según la edad (18,4% y 21,9% respectivamente).

A partir del tercero de estos indicadores de exclusión económica se identifica que la acumulación de deudas está fuertemente presente en los hogares en los que residen personas de etnia gitana (35,4%) y en los hogares con personas que están buscando un empleo (20%). Esta incidencia además suele estar encabezada por mujeres, con bajo nivel educativo, que provienen de hogares monoparentales –en los que hay casi uno de cada diez hay un menor de 18 años- y tienen limitaciones de salud.

Por último, la ausencia de independencia residencial por problemas económicos afecta fundamentalmente a los jóvenes de ambos sexos, con menos de 29 años, buscando un empleo y que residen en un hogar con cinco o más miembros.

En definitiva, estos datos ofrecen algunos resultados reseñables. Por ejemplo, alerta que el 15,7% de los hogares que están trabajando tienen, al menos, una privación básica. Este dato es cercano a la tasa de trabajadores/as pobres que, según Eurostat (2017), se sitúa en España en el 13,1% de trabajadoras/as de más de 18 años. Del mismo modo, una de cada cuatro personas solas y tres de cada diez hogares con limitaciones de salud o monoparentales, sufren alguna privación básica. Las privaciones vinculadas a la salud, por su parte, afectan a la mitad de los hogares en búsqueda de empleo y a uno de cada cuatro hogares con menores (24,5%). Del mismo modo, la acumulación de deudas está más presente en los hogares en búsqueda de empleo (20%) y en los hogares monoparentales (8,6%). Por otro lado, las dificultades de emancipación afectan a uno de cada diez jóvenes. Finalmente, cabe alertarse de que las privaciones y deudas forman parte de un gran número de hogares de etnia gitana. De hecho, resulta alarmante que alcance al 63,6% de los hogares gitanos en privación básica y al 73% en privación sanitaria. De nuevo estos datos ponen el foco sobre la necesidad de continuar trabajando por la promoción de este colectivo.

2. Formas de resistencia: evolución de las estrategias ante la crisis

Hasta ahora los datos presentados nos hablan del mantenimiento de fuertes situaciones de necesidad en los hogares. Si bien, en general, se observa una ligera mejoría con respecto a las privaciones detectadas en 2013, el fin de las necesidades todavía está lejos de los hogares en España. Como resultado de ello, muchas de las estrategias que a lo largo de esta crisis económica se han venido detectando como acciones de supervivencia y contrarresto de las necesidades en las familias se han mantenido en estos últimos cinco años.

En la siguiente tabla podemos observar algunas de estas estrategias que, ya en años anteriores, habían buscado enfrentar la pérdida de capacidad económica del hogar a través de ajustes de gasto, ahorros o algunas privaciones vinculadas al ocio. Otras acciones vinculadas con la vivienda mediante el cambio de hogar, compartir piso o acogimientos familiares. Del mismo modo, se identificaban estrategias laborales o formativas que suponían

el cambio de ciudad para buscar empleo o el abandono de procesos educativos que podían hipotecar una mejora del hogar a futuro. Por último, aquellas estrategias que requerían apoyos externos, familiares o institucionales, o incluso, que reducían la ayuda que hasta el momento ofrecían a sus familias (remesas, etc.).

Las estrategias de ajuste de gasto mantienen su posición de liderazgo. Éstas son estrategias que no requieren apoyos externos, sino que el propio hogar puede activarlas siempre que sea necesario. Suponen algunas privaciones importantes, pero en general, son fórmulas de contrarresto con menores implicaciones familiares en el corto plazo, aunque quizá sí en términos de aislamiento en el medio y largo plazo. En términos generales, se observa un descenso de la incidencia de las estrategias en los hogares con respecto a 2013. A excepción de algún ajuste de gasto vinculado con vivienda y suministros, donde la incidencia casi se reduce a la mitad, el desarrollo de estrategias desciende a niveles de 2009. Aun así, las estrategias de ajuste de gasto en ropa y calzado u ocio permanecen en más de cuatro de cada diez hogares.

Tabla 6. Evolución de las estrategias a lo largo de la crisis, por año y sobre el 100 % total de hogares de la muestra

	2009	2013	2018
Reducir los gastos fijos de la casa (electricidad, agua, calefacción)	36,6	51,5	28,1
Reducir los gastos de teléfono, televisión, Internet	39,1	49,8	23,1
Reducir los gastos en alimentación	29,6	42,3	21,3
Reducir los gastos en vestido y calzado	43,5	61,4	41,6
Dejar de usar transporte público	3,8	4,8	3,9
Recurrir a los ahorros para cubrir los gastos	17,3	21,6	16,7
Renegociar créditos o financiaciones	-	4,2	3
Reducción de actividades de ocio	44,2	59,4	40,1
Cambio de vivienda	3,2	3,6	3
Compartir piso con personas sin parentesco	2,4	2,5	2,3
Alquilar alguna habitación a otros	2,2	1,9	1,5
Volver a vivir a la casa de mis padres	1,7	1,9	1,3
Necesidad de pedir ayuda económica a parientes o amigos	14,8	20,2	20,2
Necesidad de pedir ayuda económica a una institución	7,5	9,4	11,4
Reducir los pagos y ayudas que realizaba a otras personas: remesas, ayudas a familiares, pensiones alimenticias	5,3	4,4	3,8
Abandono del proceso educativo	1,6	0,7	0,6
Cambio de ciudad por búsqueda de empleo	2,1	1,6	1,9

Fuente: EINSFOESSA 2009, 2013, 2018

Tan solo la necesidad de pedir ayuda a parientes, amigos o a instituciones ha permanecido estable o incluso ha aumentado superando niveles de necesidad de 2009. Según la encuesta, dos de cada diez hogares necesitan pedir ayuda a familiares o amigos; un dato que supone el 50% en la incidencia de esta estrategia en 2009. Asimismo, la necesidad de pedir ayuda económica a una institución ha sido la única estrategia que ha aumentado entre 2013 y 2018, poniendo en evidencia el papel protagonista que tras diez años de crisis tienen los servicios

de atención a las personas como soporte de las situaciones de necesidad. Por tanto, el desarrollo de estrategias, en términos generales, muestra una mejoría importante con respecto a 2013, sobre todo en lo que respecta a aquellas vinculadas a reducción de gastos y ajuste de presupuestos.

Sin embargo, el análisis detallado subraya tres aspectos a tener en cuenta. Por un lado, se mantiene el ajuste en ocio en un 40,1% de los hogares. Por otro lado, el 20,2% de los hogares necesitan pedir ayuda económica a familiares y amigos. Por último, más de uno de cada diez hogares necesita apoyo de instituciones. Estos resultados reenfochan a la crisis y sus consecuencias de nuevo a las redes sociales. Ya anteriores análisis identificaban cómo el recorte en ocio tenía fuertes consecuencias en términos de relaciones que, en el medio y largo plazo, contribuían al aislamiento social. Del mismo modo, el volumen de hogares que necesita ayuda de amigos o instituciones pone de manifiesto la crudeza que todavía se vive en algunas familias. El riesgo de sobrecarga de las redes sociales es también un indicador de vulnerabilidad importante que ya fue constatado en el análisis de 2014. No obstante, al menos, entre el 10% y el 20% de las familias sigue requiriendo apoyos externos.

3. ¿Qué deja la crisis? Los costes y la pérdida de capacidad de resistencia de las familias

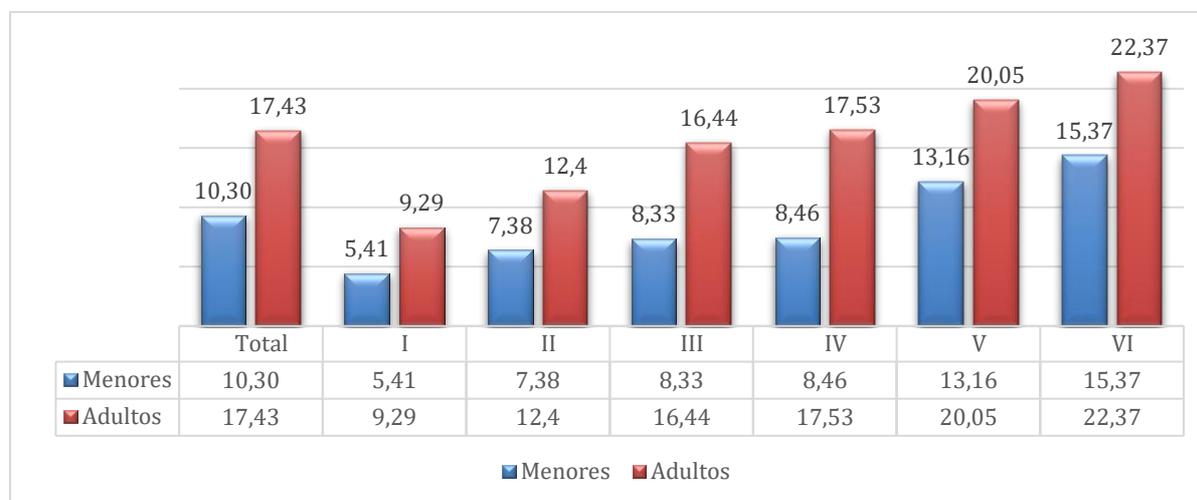
Ya en el año 2009, desde el primer impacto de la crisis económica, el análisis de las estrategias de supervivencia de los hogares alumbraba un resultado muy significativo que ponía en cuestión la capacidad de resistencia de los hogares. Las estrategias estaban resultando determinantes para la prevención de la caída de los hogares precarios a situaciones de exclusión más severa o, incluso, permitía a los hogares más excluidos sobrevivir a la crisis. Sin embargo, ya entonces se observaban algunas consecuencias que el desarrollo prolongado de estas acciones podría traer a los hogares. A nivel económico, el aplazamiento de pagos, venta de propiedades, solicitud de préstamos o gasto de ahorros suponía un empobrecimiento de los hogares a medio plazo que limitaba su capacidad de enfrentar otras situaciones de necesidad económica. Por otro lado, el ajuste de gasto en ocio y el cambio de barrio o ciudad por motivos laborales o de vivienda podrían iniciar procesos de aislamiento social. Las relaciones familiares también se veían debilitadas por el desarrollo de algunas estrategias. En casos de acogimiento familiar no deseado, convivencias forzosas o sobrecarga familiar, las situaciones de conflicto, violencia o pérdida de apoyos eran algunos de los costes que se identificaban en términos familiares. Por último, a nivel personal las estrategias también tenían fuertes costes en términos emocionales o de autoestima, la sensación de fracaso o frustración por la pérdida de autonomía en los casos de acogimiento familiar o desempleo de larga duración también dejaban fuertes cicatrices en las personas.

La encuesta Foessa del año 2013 permitía ya contrastar algunas de estas hipótesis y, sobre todo, comenzaban a ser visibles muchos de estos costes. En esta ocasión, trataremos de ver en qué medida estos costes han debilitado a los hogares en términos de salud, convivencia, crianza y procesos educativos, apoyo familiar disponible, dependencia otras ayudas externas, aislamiento o conciliación.

3.1. La salud empeora: la obesidad y las patologías mentales afectan los hogares más afectados por la crisis

La salud está estrechamente relacionada con la alimentación. Se señalaba anteriormente que, tras diez años de crisis, la incidencia de no llevar una dieta adecuada se había duplicado (uno de cada diez hogares lo manifiestan). Igualmente, el seguimiento de tratamientos o la atención sanitaria son claves para una buena salud. Las consecuencias de la pérdida de variedad en la dieta son fácilmente visibles tanto en la salud en general como en la imagen física. Uno de los primeros indicadores que puede alertar de la pérdida de salud por la privación de una dieta variada es la tasa de obesidad y sobrepeso, los cuales son ya indicadores estrechamente vinculados a la pobreza y la exclusión. La última encuesta Europea de Salud (2014) señalaba que la obesidad afectaba en España al 21,5% de las personas con empleos no cualificados, mientras que solo se identificaba en el 8,78% de las personas con los empleos más cualificados. Es decir, una incidencia casi tres veces mayor tan solo atendiendo al factor laboral. En esta línea, la última encuesta nacional de salud (2017) constata que la obesidad afecta al 10,3% de los menores de 18 años, y en población adulta se sitúa en el 17,43%. Si bien de por sí estos datos son de interés, un análisis vinculado a la clase social alumbró resultados que confirman la presencia de la obesidad en menores y adultos de los entornos más vulnerables.

Gráfico 1. Obesidad en menores hasta 18 años y adultos, por clase social²



Fuente: Encuesta nacional de salud (2017)

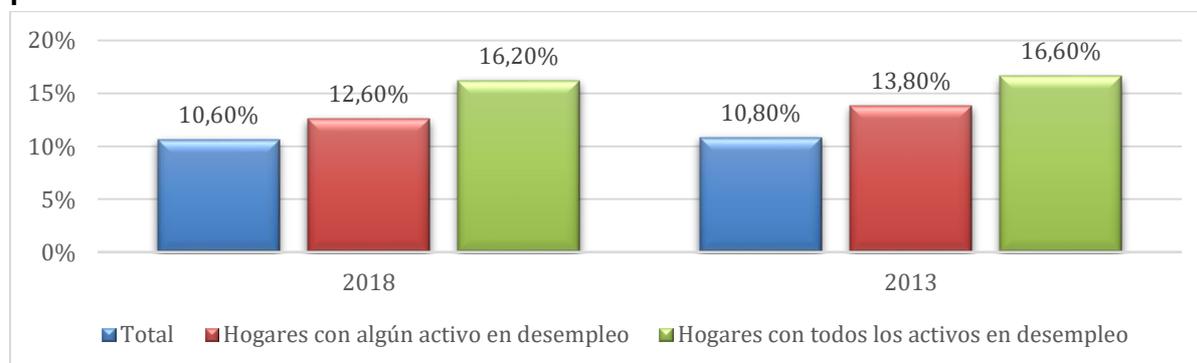
² La clasificación de niveles socioeconómicos utilizada por el INE es la siguiente: (I) Directores/as y gerentes de establecimientos de 10 o más asalariados/as y profesionales tradicionalmente asociados/as a licenciaturas universitarias. (II) Directores/as y gerentes de establecimientos de menos de 10 asalariados/as, profesionales tradicionalmente asociados/as a diplomaturas universitarias y otros/as profesionales de apoyo técnico. Deportistas y artistas. (III) Ocupaciones intermedias y trabajadores/as por cuenta propia. (IV) Supervisores/as y trabajadores/as en ocupaciones técnicas cualificadas. (V) Trabajadores/as cualificados/as del sector primario y otros/as trabajadores/as semicualificados/As. (VI) Trabajadores/as no cualificados/as .

Como se puede ver en el gráfico anterior, la incidencia de la obesidad es hasta tres veces mayor en los menores de clase social más baja que en aquellos de familias más acomodadas (15,37% frente a 5,41%). Del mismo modo, los adultos de clase baja sufren el doble de obesidad que sus homólogos de clase más alta (22,37% frente a 9,29%). El aumento de la tasa de obesidad tanto en menores como en adultos es ascendente conforme se va perteneciendo a un nivel socioeconómico menor. Aunque, como hemos visto, las diferencias entre los menores de edad son mayores que aquellas que viven los adultos de sus familias; lo cual es un dato revelador de las cicatrices que deja vulnerabilidad en la infancia.

Igualmente, el desempleo o la precariedad están estrechamente ligados a las pérdidas de capital humano. En el año 2014 se comprobaba que dos de cada diez hogares con todos los activos en paro sufrían enfermedad mental. También en ese año, Gili *et al.* (2014) apuntaban que los casos de depresión intensa han aumentado un 2,34% (2006-2010).

A lo largo de los diez años de crisis económica, al menos uno de cada diez hogares ha vivido algún trastorno de salud mental o depresión. Con el fin de poder cubrir este periodo temporal se han tomado de base dos indicadores. Para 2013 se miden los hogares que en los últimos cinco años han vivido algún trastorno de salud mental o depresión, y para 2018 lo mismo, pero con un periodo de los diez años. De esta manera, los datos ofrecen un periodo temporal de los últimos diez años (2008-2018). En el año 2013, uno de cada diez hogares manifestaba haber sufrido en los últimos cinco años algún trastorno de salud mental o depresión (10,8%). Este porcentaje se incrementaba al 13,8% en el caso de hogares con algún activo en desempleo y al 16,6% en caso de hogares con todos los activos en paro. Cinco años después, estos datos descienden ligeramente, pero siguen presentando diferencias similares: 10,6% para todos los hogares, 12,6% para los hogares con algún activo en paro y 16,2% para hogares con todos los activos desempleados. Ahora bien, la incidencia de los trastornos de salud mental o depresión no ha sido similar en todos los grupos de exclusión. Los datos muestran para 2018 que estas patologías se triplican sobre los hogares en exclusión severa que aquellos en integración plena (22,3% frente a 7,3%) y se duplican en el caso de hogares en exclusión moderada (15%).

Gráfico 2. Hogares que han tenido algún trastorno de salud mental o depresión en el periodo 2008-2018.



Fuente: EINSFOESSA 2013, 2018

Si revisamos la incidencia de la enfermedad mental por tipos de exclusión, sobre el total de hogares, observamos resultados muy significativos. En la siguiente tabla se presentan aquellos hogares con algún miembro en paro o con todos los activos en paro que han sido afectados por enfermedad mental y además se encuentran en situación de exclusión. El 2,3% de los hogares encuestados, están en situación de exclusión severa y han vivido en su hogar algún trastorno o enfermedad mental en los últimos diez años. Este dato se duplica si tomamos como base el total de hogares con algún activo en desempleo (5,4%) y se multiplica por cuatro (9,1%) en aquellos hogares con todos los activos en paro. Como resultado, uno de cada diez hogares con todos sus activos desempleados en 2018 está en exclusión severa y presenta algún trastorno mental en su hogar. Con respecto a 2013, este dato se ha incrementado ligeramente en el año 2018.

Tabla 7. Hogares con algún trastorno de salud mental o depresión en el periodo 2008-2018 y afectados por algún tipo de exclusión, que además cuentan con algún activo en paro o con todos los activos en paro, sobre el total de la muestra.

TODOS LOS HOGARES	2013	2018
Integración plena	2,2	3,1
Integración precaria	4,5	3,
Exclusión moderada	2	1,7
Exclusión severa	1,9	2,3
ALGUN ACTIVO EN PARO	2013	2018
Integración plena	0,3	0,5
Integración precaria	6,1	4,2
Exclusión moderada	3,1	2,8
Exclusión severa	4,2	5,4
TODOS LOS ACTIVOS EN PARO	2013	2018
Integración plena	-	-
Integración precaria	4,4	3,6
Exclusión moderada	4,0	3,4
Exclusión severa	8,3	9,1

Fuente: EINSFOESSA 2013, 2018

Resulta también significativo atender a los hogares precarios. Si bien su presencia se reduce en aquellos hogares con todos los miembros activos en paro, la incidencia de hogares en precariedad con enfermedad mental se incrementa si el hogar está afectado por el desempleo. En el año 2013 este incremento fue del 4,5% sobre el total de la muestra al 6,1% de los hogares con algún activo en paro. En el año 2018 se mantiene la tendencia, aunque se ha reducido ligeramente un punto porcentual para todos los hogares y dos puntos porcentuales para los hogares con algún activo en paro. Algo similar ocurre con los excluidos moderados, a más desempleo en su hogar, más presencia de enfermedades mentales, si bien, con respecto a los excluidos severos, presentan la mitad de tasa en hogares con algún miembro en desempleo (2,8%) y un tercio en aquellos con todos los activos en paro (3,4%). Por todo ello, si bien el desempleo indica un mayor riesgo a vivir patologías mentales, esta situación se cronifica en aquellos hogares más afectados por el desempleo que están también en situación de exclusión severa.

Así pues, el desempleo en las familias ha abierto nuevos espacios de exclusión. Las privaciones en alimentación y las dificultades económicas de enfrentar algunos gastos no financiados o costes de movilidad, vinculados a la asistencia sanitaria, han debilitado la salud física y mental de las familias. La obesidad es un problema de salud que afecta cada vez más a las personas con más dificultades económicas y la crisis ha incrementado de manera muy significativa su incidencia en la población más vulnerable. Por otro lado, las patologías mentales vinculadas, fundamentalmente, a los estados depresivos derivados del desempleo o la pérdida de autonomía, se asientan ya en muchos hogares. Como resultado de ello, encontramos familias con peor salud para continuar resistiendo a esta crisis, o las que puedan venir.

3.2. Violencia, consumos y conflicto social: familias más débiles

La presencia de consumos, violencia y la exposición de las familias al conflicto social son también síntomas de vulnerabilidad. En este sentido, algunos de los indicadores de exclusión construidos nos permiten comprobar qué perfiles y factores de exclusión han tenido una mayor incidencia en estas realidades. Una de las consecuencias de las situaciones de dificultad prolongadas en las familias había estado relacionada con la presencia de nuevos procesos de exclusión vinculados a la creciente tensión en las familias, cambios en los modelos de convivencia, conflicto social o inicio de consumos, entre otros.

A continuación, cuatro de estos indicadores nos permiten identificar algunos de estos procesos: (1) la presencia de malos tratos físicos o psicológicos alguna vez en la vida, (2) hogares con alguien que presente síntomas de alcohol, drogas o juego, (3) hogares con antecedentes penales, y (4) aquellos con personas en instituciones alguna vez en la vida. Al igual que anteriormente, la tabla muestra en la columna izquierda de cada indicador muestra la presencia de esas características sociodemográficas con relación al 100% de los hogares afectados por el indicador. Por el contrario, la columna derecha presenta la incidencia del indicador sobre el 100% de la muestra con estas características sociodemográficas.

Tabla 8. Indicadores de vinculados a violencia, consumos y conflicto social por factor sociodemográfico de riesgo, sobre el 100% de hogares afectados por el indicador (columna izquierda) y afección del indicador sobre el 100% de hogares con esa característica sociodemográfica (columna derecha)

	Alguien recibe malos tratos físicos o psicológicos alguna vez en la vida		Alguien problemas alcohol, drogas o juego alguna vez en la vida		Alguien tiene o ha tenido antecedentes penales alguna vez en la vida		Hogar con personas en instituciones alguna vez en la vida	
Varón	34,6	2,1	67,9	3,4	66,9	1,1	61,7	1,0
Mujer	65,4	7,5	32,1	3,1	33,1	1,0	38,3	1,2
Menos de 29 años	9,0	5,0	6,3	3,0	9,1	1,4	9,9	1,5
De 30 a 44 años	28,4		26,0		28,9		23,1	

		4,3		3,3		1,2		0,9
De 45 a 64 años	37,4	3,9	45,9	4,0	44,6	1,2	38,8	1,1
Más de 65 años	25,2	3,4	21,8	2,5	17,4	0,6	28,1	1,0
Ni lee ni escribe	0,9	3,9	0,8	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Inferior a Graduado Escolar o ESO	27,6	4,7	24,9	3,5	27,3	1,2	30,8	1,4
Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental	25,2	3,8	34,9	4,4	33,9	1,4	35,0	1,4
BUP, FPI, FPPI, Bachiller LOGSE, o superior	31,3	4,3	25,2	2,8	28,1	1,0	21,7	0,8
Diplomado, licenciado o superior	15,1	2,9	14,2	2,3	10,7	0,5	12,5	0,6
Persona sola	34,8	5,4	36,6	4,8	31,4	1,3	33,1	1,4
De 2 a 4 miembros	61,1	3,5	57,1	2,7	52,9	0,8	65,3	1,0
5 y más miembros	4,2	2,6	6,3	3,3	15,7	2,6	1,7	0,3
Trabajando	55,6	3,9	56,8	3,3	56,6	1,1	40,8	0,7
Buscando empleo	9,2	6,5	11,3	6,7	11,5	2,2	6,7	1,2
Percibía alguna pensión/ingresos prejubilación	24,7	3,2	24,2	2,6	20,5	0,7	26,7	0,9
Otras	10,5	5,8	7,6	3,5	11,5	1,7	25,8	3,7
Todos españoles o UE15	85,3	3,8	87,1	3,2	76,2	0,9	87,6	1,0
Algún extracomunitario o UE ampliación	12,9	5,0	10,3	3,3	17,2	1,8	10,7	1,1
Gitanos	1,8	8,1	2,6	10,1	6,6	8,2	1,7	2,0
Hay algún anciano >65	29,1	3,4	26,8	2,6	21,5	0,7	31,4	1,0
Hay algún menor <18	31,7	4,4	23,4	2,7	29,8	1,1	12,5	0,5
Hay algún joven 18-24	16,6	4,1	14,5	2,9	20,7	1,3	14,0	0,9
Con limitaciones de salud graves o menos grave	25,6	6,6	19,5	4,2	22,1	1,5	38,8	2,7
Hay hogar monoparental	26,0	10,9	15,7	5,5	15,6	1,7	24,0	2,6
Total	100		100		100		100	

Fuente: EINSFOESSA 2018

El perfil mayoritario de hogares afectados por malos tratos físicos o psicológicos alguna vez en la vida se encuentra sustentado por una mujer joven (menor de 29 años o de 30 a 44 años), viviendo sola, buscando un empleo y con limitaciones de salud. En la muestra total de hogares, el 66,3% están encabezados por hombres y tan solo el 33,7% por mujeres. Sin embargo, en este indicador la presencia de mujeres asciende al 65,4%. Este es un elemento diferenciador de otros indicadores analizados, donde las mujeres mostraban más incidencia sobre el total de sustentadoras y la presencia masculina era mayoritaria entre el total de personas afectadas por el indicador. En este caso, entre seis y siete hogares afectados por situaciones de violencia están encabezados por mujeres, y la incidencia de éstas sobre el total de hogares encabezados por mujeres es tres veces y media más que la incidencia de hogares encabezados por hombres (7,5% frente a 2,1%). Si bien el sexo es un indicador de vulnerabilidad incuestionable, la falta de empleo y los problemas de salud son factores de riesgo que se deben tener en cuenta. Además de ello, cabe subrayar una mayor incidencia de la violencia en los hogares con menores, siendo conocido el riesgo al que se enfrentan los menores que han convivido en entornos de violencia.

El perfil de hogares afectados por problemas alcohol, drogas o juego alguna vez en la vida está compuesto por más hombres que mujeres, de 45 a 64 años, que viven solos y están buscando un empleo. Estos resultados se alinean con la literatura que analiza el fenómeno de la pobreza y la exclusión social donde se muestra que las dificultades de acceso al empleo refuerzan la inestabilidad de las familias y constituyen un factor de ruptura que puede llevar al aislamiento social e, incluso, a una mayor propensión al consumo (Paugam, 1996). Igualmente, la mayor incidencia entre las personas de 45-64 años podría tener relación con las consecuencias del desempleo en los activos de mayor edad. De hecho, Gili *et al.* (2014) señalaban que el abuso de alcohol fue la patología que más aumentó desde el inicio de la crisis. Si bien el juego y el consumo de drogas o alcohol tan solo son señalados por un 1,6% del total de los hogares de la muestra en 2018, su presencia se incrementa por cuatro en los hogares donde hay algún miembro en paro (6,7%). Si comparamos estos datos con los obtenidos en el año 2013, se observa un ligero descenso de los hogares que manifiestan estos problemas de consumos y adicciones. En aquel momento suponían un total del 2,4% de la muestra y su presencia se incrementaba por cinco en los hogares con algún miembro el paro y por diez en las que tenían a todos sus activos en paro. La ligera mejoría de los datos económicos identificados en otros apartados puede responder a este descenso. No obstante, sigue siendo un aspecto característico de los grupos más excluidos y un obstáculo para la incorporación social. La prevención del consumo es clave para la reincorporación e incluso la vuelta al mercado de trabajo de las personas en desempleo.

Por último, otros dos indicadores nos aportan claves de interés para identificar las condiciones de vida y las trayectorias de las familias en la crisis. Por un lado, se miden aquellos hogares con alguien que tiene o ha tenido antecedentes penales alguna vez en la vida. Por otro lado, se identifica como factor de riesgo de exclusión la presencia de miembros del hogar en instituciones. Ambos son factores que se relacionan con la exclusión social y su análisis aporta información de interés para valorar tanto la inclusión de los hogares en el presente como sus oportunidades de incorporación a corto y medio plazo. El perfil característico de los hogares con algún miembro en prisión o con antecedentes alude a un joven varón con bajo nivel educativo, que se encuentra buscando un empleo y reside con varias personas (cinco o más miembros). En cambio, entre los hogares con algún miembro en instituciones, la incidencia de las mujeres es ligeramente superior a la masculina. Esto también sucede para

aquellas personas que residen en hogares unipersonales y monoparentales. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la muestra disponible de ambos indicadores resulta muy escasa para hacer valoraciones extensibles al conjunto de la población, por lo que deben tomarse los datos con cautela. Sin embargo, éstos pueden dar pistas a las políticas sociales o a los servicios de intervención social sobre los factores de riesgo que pueden incidir en estos procesos de exclusión.

3.4. Dificultades para el desarrollo educativo: habrá más pobreza heredada

Números estudios académicos y empíricos han llegado a la conclusión compartida de que las trayectorias educativas no permanecen ajenas a la realidad socioeconómica que las rodean (Mari-Klose y Mari-Klose, 2017; Choi de Mendizabal y Calero, 2013). A partir de datos de la Encuesta Foessa (2014), Flores (2016) constató que ocho de cada diez personas, cuyos progenitores no alcanzaron la primaria no han conseguido completar los estudios secundarios. Igualmente señalaba que cuatro de cada diez adultos (41%) que vivió su adolescencia con problemas económicos muy frecuentes, no consiguió alcanzar la educación secundaria. Por tanto, estos dos resultados alertaban de que los menores de hogares en situación económica desfavorecida o de entornos de menos nivel educativo presentaban más dificultades de alcanzar niveles de educación secundaria y/o de abandonar el sistema educativo, antes que aquellos que viven en hogares con menores dificultades económicas.

Tres indicadores de exclusión nos permiten en este campo identificar procesos de crianza y acompañamiento educativo en entornos más vulnerables: (1) Hogares con algún menor de entre 3-15 años no escolarizado o de 16-18 años que ni estudia ni trabaja, (2) Hogares con alguna persona sin educación obligatoria terminada y (3) Hogares con alguien que está a punto o ha sido madre adolescente sin pareja. De nuevo, la tabla siguiente permite dibujar el perfil de las personas afectadas por cada uno de los procesos de exclusión (columna izquierda sobre el 100% de los hogares con ese indicador), así como, la incidencia de dicho indicador en algunas características sociodemográficas (columna derecha sobre el 100% de cada característica sociodemográfica). Cabe señalar que el primer y el tercer indicador no cuentan con una muestra suficiente, por lo que los resultados que de ellos se extraen dan pistas sobre las situaciones de mayor vulnerabilidad, pero deben ser tomados con prudencia.

Tabla 9. Indicadores de vinculados a proceso educativo y crianza por factor sociodemográfico de riesgo, sobre el 100% de hogares afectados por el indicador (columna izquierda) y afección del indicador sobre el 100% de hogares con esa característica sociodemográfica (columna derecha)

	Hogares con alguien de 3-15 años no escolarizado o de 16-18 años que ni estudia ni trabaja		Hogares con alguna persona sin educación obligatoria terminada		Hogares con alguien que está a punto o ha sido madre adolescente sin pareja alguna vez en la vida	
Varón	65,0	1,2	62,1	29,1	58,0	1,1
Mujer	35,0	1,2	37,9	34,2	42,0	1,6
Menos de 29 años	11,3	1,9	2,5	10,8	15,4	2,8
De 30 a 44 años	42,7	2,1	11,7	13,9	28,9	1,4
De 45 a 64 años	41,9	1,3	30,4	24,7	35,6	1,2
Más de 65 años	4,0	0,2	55,4	58,6	20,1	0,9
Ni lee ni escribe	0,8	4,3	2,9	100,0	1,3	2,0
Inferior a Graduado Escolar o ESO	25,2	1,4	75,8	100,0	34,2	1,9
Graduado Escolar o en ESO, Bachiller elemental	38,2	1,7	9,7	11,5	28,2	1,4
BUP, FPI, FPII, Bachiller LOGSE, o superior	20,3	0,8	7,2	7,6	30,9	1,4
Diplomado, licenciado o superior	15,4	0,9	4,4	6,7	5,4	0,3
Persona sola	0,0	0,0	24,8	30,3	18,7	1,0
De 2 a 4 miembros	68,5	1,2	65,3	29,4	64,7	1,2
5 y más miembros	31,5	7,8	9,9	48,4	16,7	3,4
Trabajando	66,1	1,4	30,8	16,8	61,7	1,4
Buscando empleo	21,8	4,8	5,9	32,6	11,4	2,6
Percibía alguna pensión/ingresos prejubilación	6,5	0,2	53,4	53,6	20,8	0,9
Otras	5,6	0,9	9,9	42,7	6,0	1,1
Todos españoles o UE15	69,4	0,9	89,6	31,1	64,0	0,9
Algún extracomunitario o UE ampliación	23,4	3,1	8,4	25,5	26,7	3,4
Gitanos	7,3	12,5	2,0	73,7	9,3	14,1
Hay algún anciano >65	6,5	0,2	65,2	60,1	22,1	0,9
Hay algún menor <18	85,4	4,0	20,6	22,2	54,0	2,4
Hay algún joven 18-24	56,1	4,2	13,8	26,5	27,3	2,2
Con limitaciones de salud graves o menos grave	13,8	1,1	26,7	54,3	19,5	1,7
Hay hogar monoparental	18,7	2,4	12,5	41,2	20,8	2,9
Total	100		100		100	

Fuente: EINSFOESSA 2018

El perfil de los hogares con algún miembro de 3 a 15 años no escolarizado o de 16 a 18 años que ni estudia ni trabaja se corresponde con hogares constituidos por colectivos que por razones económicas o étnicas son vulnerables al fracaso escolar. Especialmente se destaca una situación de desventaja para las personas de etnia gitana (12,5% sobre el total de hogares gitanos encuestados). Según la Fundación Secretariado Gitano (2013), este colectivo presenta una tasa de fracaso escolar cinco veces mayor que la del conjunto de la población (64,4% frente a 13,3%). También estos hogares suelen estar constituidos por cinco o más miembros, entre los cuales hay alguno de ellos que está buscando un empleo.

Los hogares con alguna persona sin educación obligatoria terminada suponen un 30,9% de la muestra total de hogares. Un resultado cercano a los datos sobre población joven (de 20 a 24 años) que no ha completado al menos la 2ª etapa de educación secundaria del INE en 2017, el cual afecta al 22,8% de las mujeres o al 33,6% de hombres. Esta tasa es superior a la UE28, la cual se sitúa en 14,1% para las mujeres y 19,1% en el caso de los hombres. Según los datos de la Encuesta Foessa 2018, su perfil está básicamente compuesto por una persona sola o varios miembros (cinco o más), quienes presentan un nivel educativo bajo (inferior al Graduado Escolar o ESO). A este respecto, es plausible estimar un posible efecto de riesgo de abandono escolar sobre los hijos e hijas. Más allá de esto, cabe mencionar que esta situación tiene más incidencia entre los hogares sustentados por mujeres, de 45 a 64 años o mayor de 65 años, buscando empleo o que perciben alguna pensión. La incidencia de este indicador sobre el total de personas receptoras de pensión resulta muy significativo, ya que más de la mitad (53,7%) lo tienen. La explicación puede ser doble, evidentemente el volumen de personas jubiladas y de edades avanzadas pueden presentar niveles educativos bajos. Pero también pone de manifiesto la posible relación entre la percepción de prestaciones con el bajo nivel educativo.

Del mismo modo hay una incidencia considerable de este indicador entre los hogares monoparentales (41,2% sobre el total de hogares) y con algún menor de 18 años o algún joven de 18 a 24 años (26,5%). Este hecho resulta muy significativo desde la perspectiva de la Transmisión Intergeneracional de la Pobreza. En la anterior encuesta de 2013 se alertaba de la estrecha relación entre el abandono educativo temprano en adolescentes o el absentismo escolar en menores con el mantenimiento de los hogares en situaciones de exclusión severa (Flores, 2016). Se destaca particularmente que siete de cada diez hogares de etnia gitana tienen miembros sin la educación obligatoria terminada. Aunque igualmente se observa la presencia nada despreciable de esta situación en hogares con todos los miembros españoles o de la UE-15 (31,1%).

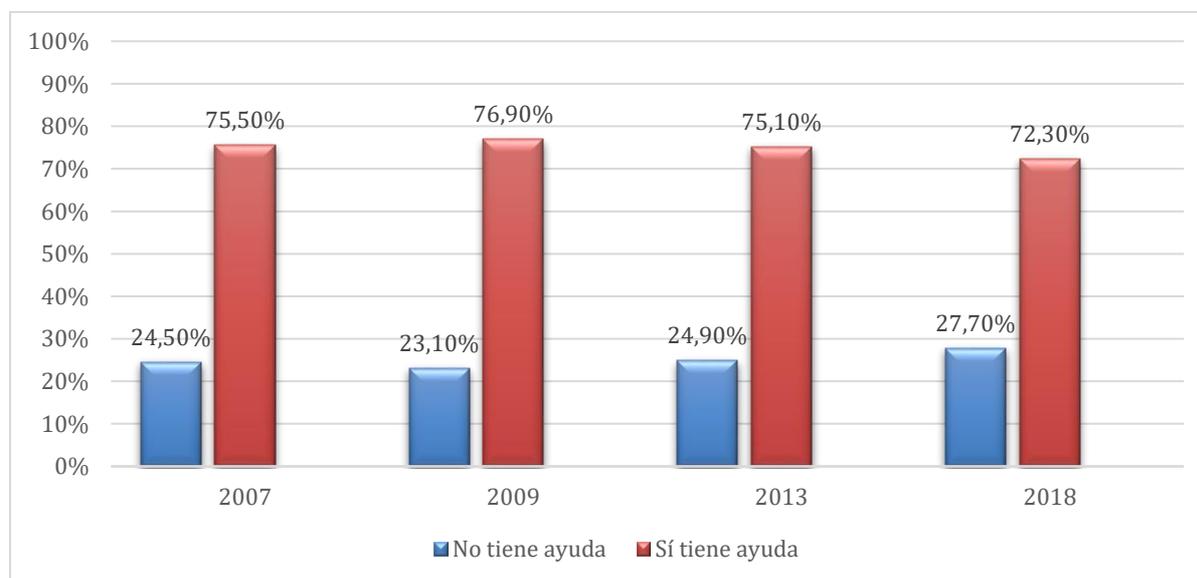
El perfil del hogar que presenta a alguien que está a punto o ha sido madre adolescente sin pareja alguna vez en la vida lo componen jóvenes menores de 29 años, que provienen de hogares con cinco o más miembros, presentan un nivel educativo bajo y están buscando un empleo. Pese a que la incidencia con respecto al desempleo es baja, cabe señalar que es casi el doble (2,6%) que la incidencia entre aquellas personas que están trabajando (1,4%). Estos datos se alinean con el último informe sobre emancipación juvenil disponible, donde tan solo el 19,4% de los jóvenes de 16 a 29 años en España habían logrado emanciparse (Observatorio de la emancipación, 2017). Una de las razones que ilustran esta baja tasa se debe a la relación que estos hogares tienen con el empleo, debido a que según este informe la tasa de temporalidad entre estos jóvenes alcanza al 57,6% y casi dos de cada diez (17,9%) de estos jóvenes trabaja menos horas de las que podría.

En definitiva, las trayectorias de los hogares se encuentran estrechamente relacionadas con procesos vitales que contribuyen a la vulnerabilidad del hogar. La crisis y cada uno de los procesos señalados debilitan a las familias en términos de inclusión. En este escenario, la búsqueda de apoyo resulta clave tanto para contrarrestar algunas de estas situaciones como para prevenir procesos de mayor deterioro.

3.5. El colchón familiar se hace más débil: se consolida la tendencia y se pierde capacidad de encontrar ayuda

La solidaridad familiar ha jugado un papel importante en la crisis económica. Ya en el año 2009, las redes familiares habían sido un soporte clave para hogares más afectados por las dificultades. En ese año, el 76,9% de los hogares señalaba que habían tenido apoyo en el caso de necesitarlo. Algunos testimonios entrevistados en aquellos años valoraban que la capacidad de protección de la familia se debía, fundamentalmente, a que era una ayuda rápida, flexible y multidimensional. Es decir, el apoyo familiar superaba la ayuda económica y ofrecía, sobre todo, soporte emocional, ayuda a la conciliación, etc. (Martínez Virto, 2014).

Gráfico 3. Hogares que presentan o no ayuda en caso de necesidad por año, respecto al total de hogares



Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018.

Sin embargo, como muestra el gráfico, la capacidad de ayuda familiar con la que contaban los hogares se ha ido progresivamente deteriorando desde entonces. Con respecto a antes de la crisis, el porcentaje de hogares que manifiesta no tener ayuda cuando la necesita ha ascendido más de tres puntos porcentuales. Es decir, del 24,5% en 2007 al 27,7% en 2018. Si bien algo más de siete hogares de cada diez continúan teniendo ayuda en caso de necesidad, la tendencia descendente iniciada ya en 2013 se consolida en estos últimos cinco años.

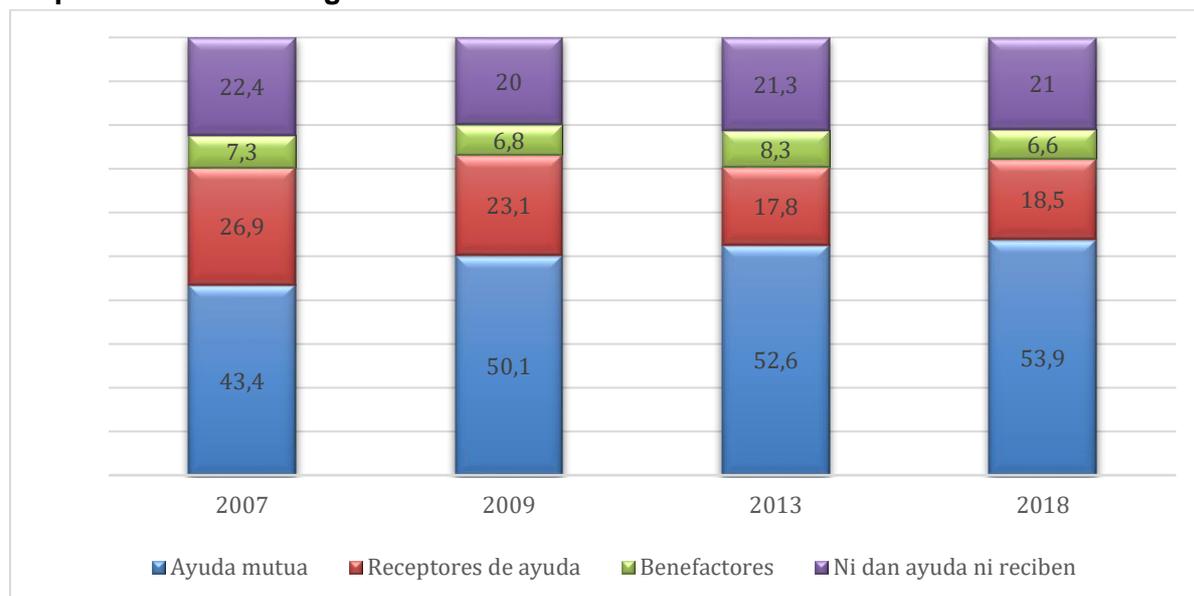
Paradójicamente, la ayuda no se reparte de manera equitativa entre los hogares de la muestra, ni si quiera parece estar relacionada con las necesidades que se acumulan en unos u otros. Si hacemos una mirada por espacios de exclusión se comprueba que aquellos hogares que más apoyo tienen en caso de necesidad son las familias en integración plena (el 74,9%). Por el contrario, tres de cada diez personas en situación de integración precaria, de exclusión moderada o de exclusión severa no cuentan con ayuda en casos de necesidad. Por tanto, la capacidad de ayuda se ha visto reducida, precisamente, en aquellos hogares con más necesidades, tal y como comenzaba a ocurrir en 2013. De esta forma se apunta otro resultado de interés, la distancia en la escala social cada vez se reduce más entre aquellos hogares vulnerables de espacios de precariedad o exclusión moderada con las familias en situación de exclusión severa más tradicional. Por el contrario, la brecha comienza a situarse entre aquellos hogares en integración plena y el resto.

Tabla 10. Hogares que tienen o han tenido alguna persona que pueda ayudarle cuando tiene problemas, por grupos de exclusión.

	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Sí	74,9	70,7	69,6	70,3
No	25,1	29,3	30,4	29,7
	100	100	100	100

Fuente: EINSFOESSA 2018

La pérdida de capacidad de ayuda, no obstante, no ha ido de la mano de una disminución de las necesidades de las familias. Ante ello, si bien la ayuda disponible ha disminuido, los hogares han buscado distintas formas de apoyo. Al igual que en el Informe FOESSA 2013, en esta ocasión se ha realizado un análisis específico de cuatro tipos de ayuda. En la primera categoría están los hogares denominados “ayuda mutua”, porque reciben ayuda y también están en capacidad de ofrecerla en caso de necesidad. En la segunda categoría se identifican los hogares “receptores de ayuda”, los cuales reciben ayuda externa pero no tienen capacidad de ofrecerla. En la tercera categoría se encuentran los hogares “benefactores”, que suministran ayuda pero ellos no la reciben. Por último, en la cuarta categoría, están aquellos hogares que “ni dan ni reciben” ayuda. Las cuatro categorías de análisis han sido construidas a partir preguntas presentes en las encuestas y que responden al apoyo o recepción de ayuda en situaciones de necesidad.

Gráfico 4. Evolución de los hogares en relación a la ayuda que reciben y/u ofrecen, respecto al total de hogares

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2009, 2013, 2018

El análisis por tipos de ayuda constata en la misma línea de lo señalado anteriormente, que el porcentaje de hogares benefactores ha disminuido desde el inicio de la crisis, al igual que lo han hecho en 8,4 puntos porcentuales los hogares receptores de ayuda. En el caso de los benefactores, el descenso más significativo se observa entre los años 2013 y 2018 (1,7 puntos porcentuales). En general, los hogares presentan formas de ayuda recíproca, suponiendo la mitad de la muestra. Aun así, cabe señalar que, aproximadamente, dos de cada diez hogares ni dan ni reciben ayuda.

Tabla 11. Tipos de ayuda, por espacios de la exclusión en el año 2018 (respecto al total de hogares)

	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa
Ayuda mutua	60	53,7	40	39,3
Receptores de ayuda	10	17,1	28	32,8
Benefactor	15	7,3	24	6,6
Ni dan ayuda ni reciben	15	22	8	21,3
Total	100	100	100	100

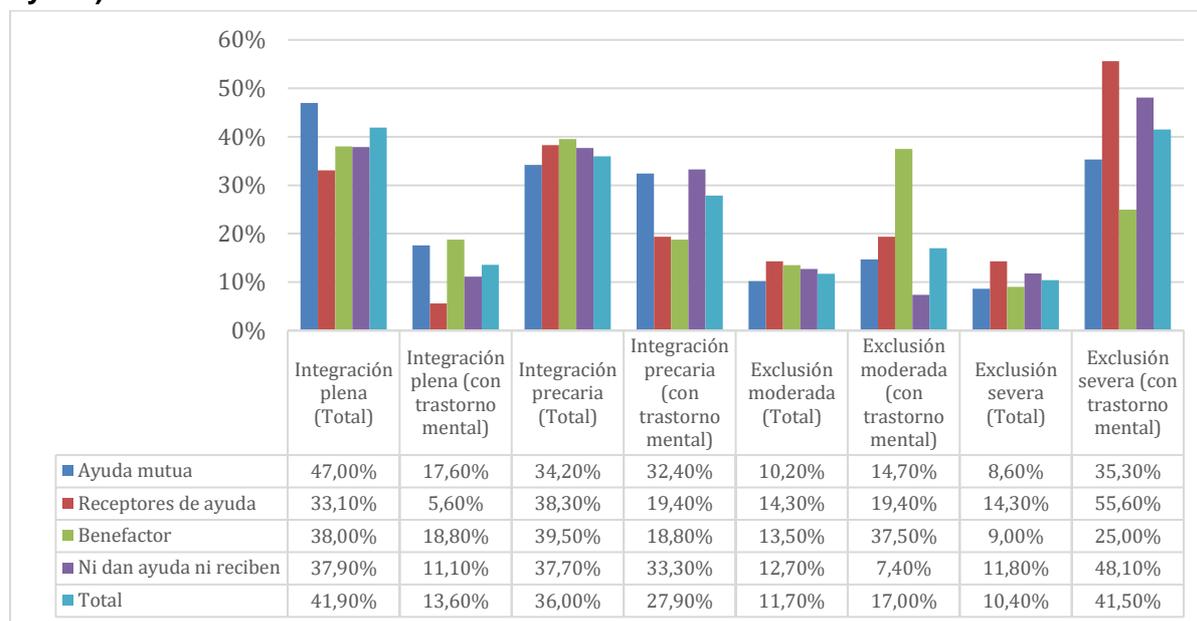
Fuente: EINSFOESSA 2018

Si atendemos a esta cuestión sobre el total de hogares por grupos de exclusión se comprueba que seis de diez hogares integrados plenamente y cinco de cada diez hogares precarios ofrecen ayuda mutuamente. La presencia de esta ayuda recíproca en aquellos hogares excluidos desciende a cuatro de cada diez, suponiendo 13 puntos porcentuales por debajo de la media de hogares (53,9%). Por otro lado, la presencia de los hogares en exclusión entre

aquellos que solo reciben ayuda es de tres de cada diez hogares, casi el doble de la media para toda la población en el caso de los excluidos severos (32,8%). Esta forma de ayuda entre los hogares integrados plenos se reduce por tres con respecto a los hogares excluidos y a la mitad en el caso de los hogares precarios (17,1%). Resulta sorprendente la tasa de hogares benefactores entre aquellos hogares en exclusión moderada, suponiendo casi uno de cada cuatro. La razón puede estar vinculada a que forman parte de aquellas familias más vulnerables y fundamentalmente, están más expuestos a recibir solicitudes de ayuda por parte de los hogares excluidos severos. Por último, los hogares precarios superan la media total con respecto a la tasa de hogares que ni dan ni reciben ayuda (22%), situándose en este espacio en un nivel de vulnerabilidad cercano al de aquellos hogares en exclusión más severa.

Al observar los tipos de ayuda sobre el total de hogares por espacio de exclusión hemos encontrado resultados significativos. En el gráfico siguiente podemos comprobar, además, qué peso toma cada espacio de inclusión sobre el total de hogares que realizan cada tipo de ayuda. En general, cabe recordar que cuatro de cada diez hogares están en una situación de integración plena, mientras que los seis restantes se encuentran en situaciones de riesgo o exclusión social. En concreto, el 36% de la muestra son hogares en integración precaria, el 11,7% en exclusión compensada y uno de cada dos hogares permanece en exclusión severa. Tomando estos datos como base en la distribución de la muestra total por espacios de exclusión, observamos que los hogares que ni dan ni reciben ayuda están sobrerrepresentados en los hogares precarios, compensados y excluidos severos. Por tanto, la vulnerabilidad se relaciona con la ausencia de redes de ayuda en los sectores con dificultades. Del mismo modo, estos mismos hogares se encuentran infrarrepresentados en la modalidad de “ayuda mutua”, poniendo sobre la mesa las dificultades que estas situaciones de mayor incertidumbre presentan para el desarrollo de redes de apoyo recíproca. De nuevo este análisis continúa reforzando ese debilitamiento de las clases más intermedias, y la distancia que, progresivamente, van tomando con respecto a los hogares en integración plena. Así pues, además de los factores tradicionales de exclusión laboral más característicos de hogares severos excluidos, la precariedad laboral se asienta como un detonante clave en el debilitamiento de las redes de apoyo.

Gráfico 5. Incidencia de cada grupo de exclusión por tipología de ayuda, sobre el total de hogares y el total de hogares afectados por trastorno mental (100% tipología de ayuda)



Fuente: EINSFOESSA 2018

Si comparamos esta incidencia de los distintos grupos de exclusión en los tipos de ayuda, teniendo en cuenta el total de los hogares afectados por trastorno mental,³ vemos que las formas de relación de ayuda cambian significativamente. En relación con la ayuda mutua, la presencia de hogares en integración plena se reduce por cuatro (del 47% al 17,6%), pero se multiplica por cuatro en el caso de los excluidos severos (de 8,6% a 35,3%). Esta tendencia ocurre en cada tipo de ayuda, constatando que la presencia de enfermedades mentales reduce la incidencia de los hogares integrados en los distintos tipos de ayuda. Por el contrario, no parece ser un aspecto que reduzca la participación en la gestión de la ayuda en el caso de los hogares excluidos.

3.6. Las prestaciones de garantía de rentas y los servicios sociales, soportes indispensables en la crisis

Las condiciones de desempleo prolongado tuvieron un fuerte impacto en la capacidad adquisitiva de las familias. En un primer momento, las prestaciones por desempleo jugaron un papel importante, fundamentalmente, en aquellos hogares que habían generado derecho a la protección contributiva. No obstante, las limitaciones en la garantía de ingresos de las prestaciones por desempleo tanto contributivas como no contributivas se pusieron de manifiesto en las situaciones de desempleo más prolongadas. En 2018, la mitad de los hogares beneficiarios de una prestación (54,8%) eran hogares en situación de exclusión

³ Se consideran hogares con trastorno mental aquellos en los que algún miembro de su hogar ha sido diagnosticado por trastornos neuróticos, depresión, ansiedad, trastorno obsesivo, trastornos psicóticos, esquizofrenia o paranoia.

severa. La presencia de otros hogares como los de exclusión moderada o precarios se reduce a la mitad (23% y 19,8%, respectivamente). Los precarios ocupan una posición protagonista entre aquellos que han agotado la prestación. Resulta reseñable cómo los hogares en exclusión severa suponen el 43,9% de aquellos que han pedido prestación y les ha sido denegada, y seis de cada diez hogares a la espera de resolución. Por tanto, cabe subrayar que son aquellos hogares en exclusión más severa quienes muestran una mayor presencia en la percepción o solicitud de las prestaciones.

Tabla 12. Hogares beneficiarios o solicitantes de prestaciones sobre el total de hogares por tipos de exclusión/ y el total de beneficiarios

	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total
Es beneficiario/a actual	12,2	27,2	38,2	42,5	35,5	2,4	19,8	23	54,8	100
Fue beneficiario/a en el pasado, pero ya no lo es	53,1	36,4	28,3	16,6	26,8	13,7	35,3	22,6	28,4	100
La ha solicitado, pero le ha sido denegada	30,6	21,2	19	20,0	20,8	10,1	26,4	19,6	43,9	100
Está pendiente de la resolución de su solicitud	2,0	9,2	14,5	18,1	13,9	1,0	17,2	22,2	59,6	100
Otras	2,1	6,0		2,8	3,0	4,8	52,4		42,8	100
Total	100	100	100	100	100	6,9	25,9	21,4	45,8	100

Fuente: EINSFOESSA 2018

A pesar de ello, la parte izquierda de la tabla muestra la situación de percepción de la prestación sobre el total de hogares de cada tipo de exclusión. En este sentido, resulta reseñable cómo casi seis de cada diez hogares excluidos severos no tienen actualmente prestación, un 16,6% de ellos porque la han agotado, un 20% porque la han solicitado y les ha sido denegada, y un 18,1% porque están pendientes de resolución. Estos datos se reducen ligeramente para los hogares excluidos compensados y los hogares integrados precarios. Entre ambos grupos intermedios se produce una diferencia de más de 10 puntos porcentuales entre aquellos hogares beneficiarios – un 38,2% de los hogares excluidos compensados y un 27,2% de los hogares precarios. En el caso de los hogares precarios casi cuatro de cada diez la han tenido, pero la han agotado y este dato se incrementa al 53,1% de los hogares en integración plena.

Tanto las prestaciones de garantía de rentas como otros servicios de atención a las personas han sido importantes amortiguadores de la crisis. En general, la encuesta Foessa 2018 muestra que el 16,6% de los hogares ha solicitado en algún momento ayuda a través de subsidios por desempleo, PREPARA o RAI. El 12,5% ha solicitado ayuda a través de los

Servicios Sociales Públicos, en torno al 7% lo ha hecho a pensiones no contributivas o a Cáritas, el 6,8% a ayudas públicas de emergencia, el 6,7% a las rentas mínimas y, por último, el 5,3% a otras entidades como Cruz Roja o Bancos de Alimentos.

Tabla 13. Solicitud de ayuda a través de prestaciones, recursos y servicios por grupos de exclusión sobre el 100% de hogares con cada tipo de exclusión

	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total
Renta mínima CCAA	1,2	5,0	12,8	28,6	6,7
Ayudas de Emergencia/ayudas extraordinarias	1,2	5,6	12,3	27,3	6,8
Subsidio por desempleo, Renta Activa de Inserción, PREPARA	8,8	18,4	24,4	33,5	16,6
Pensiones no contributivas	3,7	7,2	11,3	15,5	7,1
Servicios sociales públicos	2,3	11,	22,7	46,6	12,5
Cáritas (Diocesanas o parroquiales)	0,5	5,2	13,0	32,5	7
Otras entidades (Cruz Roja, bancos de alimento)	0,5	3,9	10,1	24,5	5,3

Fuente: EINSFOESSA 2018

Si tenemos en cuenta el total de hogares de cada uno de los espacios de exclusión, se constata cómo la solicitud de ayuda a los Servicios sociales, ayudas de emergencia, subsidios asistenciales por desempleo, Rentas mínimas de las Comunidades Autónomas o prestaciones de Cáritas u otras entidades del tercer sector son amortiguadores clave en los hogares más afectados por la crisis. En general, tan solo una pequeña parte de los que se encuentran en integración plena no se ha visto en la necesidad de solicitar apoyo y cuando lo ha hecho, ha sido fundamentalmente mediante la solicitud de prestaciones asistenciales por desempleo (8,8%). También en los hogares precarios o excluidos moderados estas prestaciones son las que mayor incidencia presentan. No ocurre lo mismo con los excluidos severos. En este caso, tres de cada diez hogares en exclusión severa han solicitado en alguna ocasión estas prestaciones asistenciales por desempleo, similar al volumen de solicitudes realizadas a Cáritas (32,5%) o a las prestaciones de renta mínima autonómica (28,6%). Sin embargo, la mitad de ellos manifiesta haberlo hecho en los servicios sociales públicos (46,6%). Estos datos duplican lo señalado por los excluidos moderados y se multiplican por cuatro o cinco si lo comparamos con los hogares en integración precaria. La única excepción responde a los subsidios por desempleo, donde es mayor en el caso de la exclusión severa, pero no con diferencias tan significativas.

Ahora bien, la capacidad de elección entre uno u otro recurso es limitada. Dos análisis cualitativos realizados en Navarra en los años 2011 y 2014 mostraban que, en el caso de los hogares más afectados por la crisis, la elección de recursos de apoyo dependía de los requisitos de acceso al mismo y no a la capacidad de elección por parte de los usuarios (Lasheras *et al.*, 2012 y Martínez Virto, 2015). De hecho, en la mayoría de los casos, era habitual la combinación de varios recursos o estrategias. En esta ocasión, la encuesta Foessa

2018 ha tratado de identificar cual es el orden por el que se activan los distintos servicios de atención a las personas. Sobre el total de hogares entrevistados, seis de cada diez acuden a los servicios sociales públicos como primera opción. La segunda opción seleccionada es Caritas, que resulta la opción preferente para el 17,6% de la muestra. EL 4,1% acude a Cruz Roja y el 2,3% a otras entidades no lucrativas. Otros servicios públicos como los de empleo son solo seleccionados por el 3,3% de la muestra.

Tabla 14. Servicios a los que primero se acude en caso de necesidad económica

	Integración plena	Integración precaria	Exclusión moderada	Exclusión severa	Total
A los servicios sociales públicos	58,8	59,8	60	59,9	59,4
A Cáritas	16,	17,2	18,4	24,9	17,6
A Cruz Roja	4,1	4,2	3,5	4,2	4,1
A otras entidades privadas sin ánimo de lucro (Banco de alimentos...)	1,9	2,4	2,9	3,1	2,3
A otros servicios públicos (empleo...)	3,2	3,6	3,1	2,3	3,3
A ningún sitio	16	12,7	12,1	5,6	13,3
Total	100	10	100	100	100

Fuente: EINSFOESSA 2018

Por grupos de exclusión no se observan cambios significativos en relación con el recurso al que acudir primero en caso de necesidad. Los Servicios Sociales públicos continúan siendo la primera opción de todos los hogares, un aspecto relacionado con el ejercicio efectivo del derecho subjetivo y la universalidad en el acceso al sistema. Tampoco se observan diferencias en el acceso a otros servicios públicos. Las mayores diferencias entre los excluidos severos y el resto de los hogares se encuentran a la hora de acceder a entidades como Cruz Roja o los bancos de alimentos, opciones que se aumentan significativamente como primera opción a la hora de acudir a solicitar una ayuda económica. Por lo general, aquellos más integrados tienden a acudir a Servicios Sociales o a solicitar prestaciones que han requerido previamente algún tipo de cotización a través del empleo. Por el contrario, los excluidos severos son más numerosos entre aquellos hogares que reciben ayudas de emergencia social o apoyo desde entidades como Cáritas. A ello se une una fuerte presencia de los Servicios Sociales públicos en el apoyo a las familias en la crisis.

Como hemos visto hasta el momento, los datos del año 2018 confirman las sospechas sobre una progresiva pérdida de capacidad de resistencia de las familias por contar con una peor salud, presencia de consumos, pérdida de autoestima y autonomía, y una menor capacidad de encontrar apoyo en la familia y los amigos. Sin embargo, además de ello, la crisis ha tenido un fuerte impacto en las relaciones sociales de los hogares y, por tanto, en su situación de aislamiento. La pérdida de relaciones sociales habituales es señalada por uno de cada diez hogares (10,8%). Este dato se ha visto reducido en 7 puntos porcentuales desde 2013 (17,7%), pero es tres veces mayor a la pérdida de relaciones sociales que manifestaban los hogares en 2009. En suma, la crisis también deja más hogares que han perdido relaciones sociales.

3.7. El aislamiento y el conflicto social impactan fuerte sobre los grupos precarios y excluidos

La pérdida de relaciones sociales o su deterioro es un aspecto para subrayar en esta crisis económica. El volumen de hogares que manifiestan no tener relaciones con miembros de su familia se ha incrementado significativamente del 0,1% al 1,3%. Si bien son porcentajes que suponen un volumen moderado de hogares en esta situación, la tendencia es, sin duda, significativa. También la ausencia de relaciones con amistades ha llevado una tendencia ascendente, duplicándose con respecto a 2007. No ha ocurrido así en el caso de vecindad y compañeros de trabajo, donde la tasa ha descendido. Por tanto, la ausencia de relaciones con amistades o miembros del hogar se ha incrementado en estos años de crisis. Este resultado mantiene la tendencia ya identificada en el año 2013, donde los hogares afectados por el desempleo prolongado veían deteriorados otros espacios de bienestar como la salud o las relaciones sociales.

Tabla 15. Hogares que no tienen relaciones con redes sociales, sobre el total de hogares por cada red social

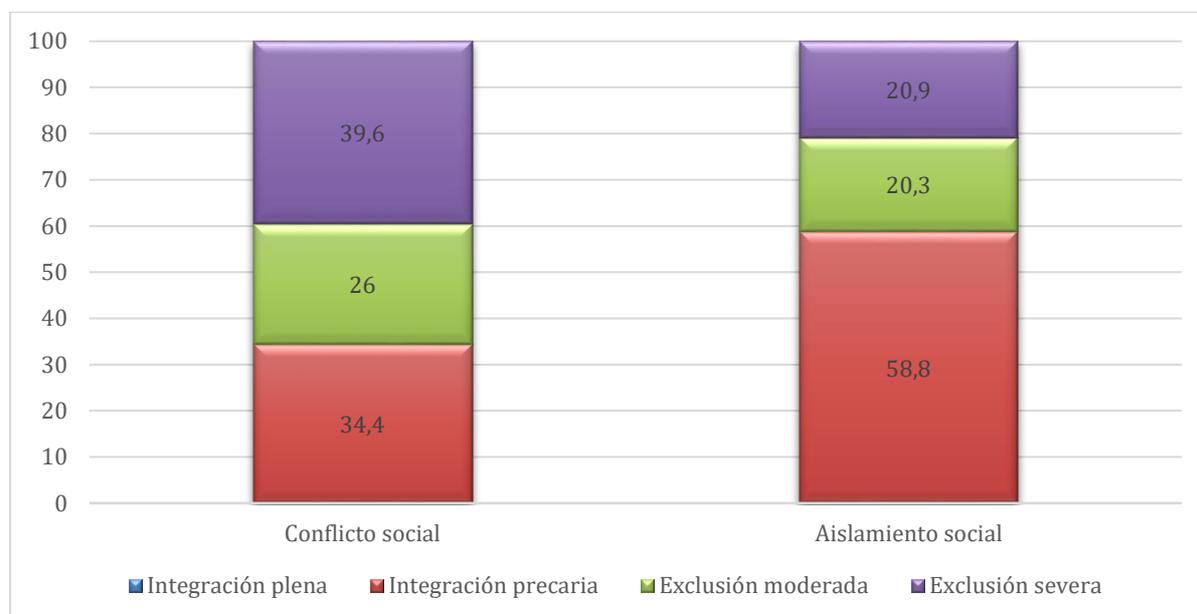
	2007	2018	2018 Hogares en desempleo de larga duración	2018 Hogares en exclusión severa	2018 Hogares con problemas de salud mental
Miembros del hogar	0,1	1,3	1,8	2	2,7
Otros/as familiares	0,8	0,4	1,6	2,7	4,7
Amistades	0,3	0,6	0,9	1,8	6,8
Vecindad	4	3,3	4,3	6,5	12,8
Compañeros/as de trabajo	1,9	0,8	2	2,2	2

Fuente: EINSFOESSA 2007, 2018

En esta línea, el carácter concatenado de la crisis se incrementa considerablemente si atendemos a los que están afectados por el desempleo de larga duración, la exclusión severa o los problemas de salud mental. Para el año 2018, se aprecia un incremento del número de hogares con personas en situación de desempleo que, a su vez, manifiestan no tener relaciones sociales. Este aumento es especialmente significativo en el caso de familiares, amistad y vecinos/as. El incremento también es reseñable si tomamos como total de la muestra a aquellos hogares en exclusión severa. En este caso, la ausencia de relaciones con familiares no convivientes se incrementa del 0,4% para el total de la muestra al 2,7% en los hogares severos. Este incremento se multiplica para el caso de vecindad y se triplica para el de las amistades. Por último, la falta de relaciones sociales en los hogares afectados por enfermedad mental es todavía superior al resto de grupos, especialmente, en lo relativo a familiares de fuera del núcleo de convivencia, amistades o vecindad, ya que el 12,8% de los hogares afectados por enfermedad mental no tiene relaciones con el vecindario.

El aislamiento social y el conflicto son indicadores que se han relacionado, tradicionalmente, con las situaciones de exclusión social. En el año 2018, el 6,8% de los hogares de la muestra se encuentra en una situación de conflicto social y el 4,8% en aislamiento. Como se puede comprobar en la siguiente gráfica, ninguno de estos indicadores afecta a los hogares plenamente integrados. Por el contrario, cuatro de cada diez hogares en aislamiento social están en situación de integración precaria o de exclusión severa. Resulta también reseñable cómo en los últimos años se ha producido un incremento progresivo de los hogares precarios en las situaciones de conflicto social, estando 8 puntos por encima de los grupos en exclusión moderada. En el caso del aislamiento, también este grupo muestra una alta presencia: casi seis de cada diez hogares en aislamiento son precarios, llegando así a triplicar el volumen de los hogares en exclusión social. Así pues, los datos de 2018 muestran el vínculo entre estas situaciones de aislamiento y conflicto con las condiciones de vida más inseguras y vulnerables.

Gráfico 6. Hogares en conflicto social y aislamiento social, por tipos de exclusión



Fuente: EINSFOESSA 2018

Igualmente, las situaciones de conflicto social y aislamiento tienen una incidencia fuerte en otras dimensiones de la exclusión social. Los informes FOESSA han venido identificando 8 dimensiones relacionadas con la exclusión social (empleo, consumo, política, educación, vivienda, salud, conflicto social y aislamiento social). En el año 2018, los hogares excluidos del empleo suponían un 28,7% de la muestra total. También más de uno de cada cuatro hogares vivía una situación de exclusión en materia de vivienda (26,6%). La exclusión de la salud acoge al 17,2% de los hogares y la exclusión política al 13,6%. Los hogares excluidos del consumo y la educación fueron menos numerosos, aunque estaban cerca de uno de cada diez hogares con un 7,5% y 8,6%, respectivamente.

En la siguiente tabla observamos cómo estas situaciones de exclusión se incrementan significativamente en el caso de los hogares en conflicto social y aislamiento. Dentro de los hogares en conflicto las situaciones de exclusión del empleo, consumo, vivienda y educación se duplican con respecto a la población en general, y se multiplican por tres en el caso de la exclusión política (22%). En total, la mitad de los hogares en conflicto social en 2018 tenían, además, una situación de exclusión del empleo (46,7%) o de exclusión de la vivienda (46,8%). La exclusión del empleo en estos hogares se ha incrementado en 20 puntos desde el inicio de la crisis, al igual que ocurre en el caso de la exclusión del consumo. Es por ello por lo que la crisis parece haber tenido un fuerte impacto en las dimensiones relacionadas con el empleo o el consumo, mientras los niveles de exclusión en salud y vivienda han permanecido estables.

Tabla 16. Relación entre las diferentes dimensiones de la exclusión social

Incidencia de las situaciones de CS/AS en los procesos de exclusión (total hogares en CS/AS)								
	Conflicto social				Aislamiento social			
	2007	2009	2013	2018	2007	2009	2013	2018
Exclusión del empleo	26,2	41,4	59,2	46,7	14,6	14,7	22,4	26,1
Exclusión del consumo	4,4	3,3	8,4	16,4	1,8	4,1	3	8,5
Exclusión política	30,6	29,8	16,8	22	14,6	17,1	18,6	14,2
Exclusión de la educación	23	13	15,2	14,2	5,4	13,9	8,9	9,2
Exclusión de la vivienda	37,9	34,9	46,1	46,8	32,7	22,1	26,4	26,3
Exclusión de la salud	27,3	24,7	39,4	26,3	13,2	19,4	24,8	25,4

Fuente: EINSFF 2007, 2009, 2013 y 2018 (total de hogares)

Igualmente, en el caso de los hogares en aislamiento social, la exclusión en salud o consumo se incrementa ligeramente con respecto al total de la muestra. La exclusión en el empleo entre los hogares aislados con respecto a los años anteriores se ha multiplicado casi por dos entre 2007 y 2018 (del 14,6% al 26,1%). Ocurre de forma similar con las situaciones de exclusión de la salud y la educación, donde la crisis deja entre los aislados uno de cada diez hogares excluidos de la educación y uno de cada cuatro de la salud. Finalmente, el aislamiento también tiene efectos muy perniciosos en el acceso al consumo, debido a que su peso se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años.

En definitiva, tanto el aislamiento social como el conflicto parecen tener causa y efecto en las situaciones más vulnerables. Por un lado, los hogares más afectados por la crisis han vivido procesos de aislamiento o conflicto más intensos. La crisis económica ha tenido un fuerte impacto en las familias. Las estrategias de contrarresto han implicado acciones de ajuste de gasto o reducción del presupuesto en ocio y relaciones sociales, acentuando procesos de aislamiento o empeoramiento de la salud. Por otro lado, el deterioro de las relaciones acentúa la reducción de las redes de apoyo y ayuda; un aspecto también característico de esta última fase de la crisis. El aislamiento de las familias tiene efectos muy perniciosos para la capacidad de respuesta y resistencia a las dificultades. El apoyo ofrecido por las redes en los primeros años de crisis logró frenar intensos procesos de exclusión social severa. Diez años después, la progresiva pérdida de relaciones y la extenuación de los hogares se suman a la coyuntura de austeridad. El resultado constata familias con menos capacidad de respuesta, pero

también entornos y contextos más excluyentes que se convierten en grandes obstáculos para alcanzar el bienestar y la estabilidad en los hogares más vulnerables.

3.8. Cuidados y conciliación: una barrera de incorporación para las mujeres con costes en la crianza de los menores

Las políticas de austeridad emprendidas a raíz de la crisis económica tampoco han contribuido a la igualdad de género y la incorporación al empleo, por el contrario, han incentivado la reprivatización de los cuidados y los modelos familiares tradicionales (Gálvez, 2013). La escasa inversión en políticas de conciliación o la precariedad de las relaciones laborales han aumentado la vulnerabilidad económica de los hogares, debido a las dificultades de sus miembros para acceder y mantener el empleo. Ahora bien, la vulnerabilidad de las mujeres es bastante más mayor que la de los hombres. En parte esto se debe a que son ellas las que se siguen haciendo cargo fundamentalmente de los cuidados y frenan sus carreras laborales o no buscan empleo por razones de cuidados.

Tal y como se puede observar en la siguiente tabla, la proporción de hogares en los que las mujeres declaran que no pueden reincorporarse en el mercado laboral si encontraran ahora un empleo es el doble que la de los hombres por enfermedad o incapacidad propia (67,9% frente a 32,1%) y hasta cinco veces mayor que la de los hombres por razones de responsabilidades familiares o razones personales (85% frente a 15%).

Tabla 17. Indicadores sobre la no incorporación al mercado laboral de las personas desocupadas según sexo

		Varón	Mujer	TOTAL
Si encontrara ahora un trabajo...	Podría empezar ahora mismo	41,4	58,6	100
	No puedo. Tengo que completar estudios o formación	44,4	55,6	100
	No puedo por responsabilidades familiares o razones personales	15	85	100
	No puedo. Enfermedad, incapacidad propia	32,1	67,9	100
	No podría por otras razones	58,8	41,2	100
TOTAL		40,6	59,4	100

Fuente: EINSFOESSA 2018

Las razones por las cuales las personas desocupadas no han buscado un empleo también se diferencian de forma significativa según el sexo. Entre los hogares en los que las personas declaran no haber buscado un empleo porque la salud no se lo permite, la proporción de mujeres duplica a la de los hombres (66,7% frente a 33,3%). A su vez, en aquellos en los que las personas declaran no haber buscado un empleo porque el cuidado de alguna persona dependiente no se lo permite, la proporción de mujeres es cinco veces mayor que la de los hombres (83,8% frente a 16,2%). Por último, en los hogares que declaran no haber buscado un empleo porque la crianza de sus hijos e hijas no se lo permite, la proporción de mujeres es catorce veces mayor que la de los hombres (93,7% frente a 6,3%). Así pues, estos datos muestran un resultado determinante para los procesos de incorporación y salida de la crisis. La incorporación de las mujeres al mercado de trabajo presenta más barreras que las de sus

homólogos varones. Esta realidad marca ese refuerzo de los modelos de cuidados y familiares defendido por Gálvez (2013) donde el trabajo de cuidados es asumido, sobre todo, por las mujeres y constituye un hándicap para su reincorporación en el mercado laboral y, por tanto, en su capacidad de resistencia o salida de la crisis.

Gráfico 7. Indicadores de razones por las que no se ha buscado un empleo según sexo



Fuente: EINSFF 2018 (% sobre el total de hogares)

Sin embargo, esta diferencia no solo marca las oportunidades de acceso al empleo. También la literatura destaca una fuerte división sexual de trabajo (diferencias de género en el tiempo dedicado a las tareas domésticas y de cuidado) incluso en parejas de dos ingresos. Como resultado, las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres a las tareas domésticas y, en caso de tener niños pequeños, las madres suelen duplicar el tiempo dedicado a los cuidados respecto a los padres. A la inversa, ellos dedican más horas al empleo cuando tienen hijos (González y Jurado-Guerrero, 2009; Folgueras-Domínguez, 2015).

La ausencia de recursos de conciliación o las barreras de acceso a ellos refuerzan esta familiarización de los cuidados. Las dificultades de acceso a las guarderías u otros recursos de cuidados en el entorno familiar como el Servicio de Atención a Domicilio (SAD) son constatados en la muestra. Según los datos de la Encuesta Foessa de 2018, el 13,2% de los niños y niñas nacidos entre 2007 y 2017 no han ido o no van a la guardería por su elevado coste. Una proporción bastante superior en comparación con la de niños y niñas que no han ido o no van a la guardería por motivos de ausencia de plazas cerca (2,9%) o por horario inadecuado (0,9%). Por tanto, las causas de ello se vinculan, fundamentalmente, a razones económicas, pero también a razones que tienen que ver con la flexibilidad horaria o la cercanía del territorio.

Estos resultados ponen sobre la mesa dos posibles riesgos para aquellas familias más desfavorecidas. Por un lado, los costes de la escolarización causan menores niveles de escolarización entre los niños y niñas más vulnerables y, en particular, de aquellos cuyas madres tienen un bajo potencial de ingresos en el mercado de trabajo. En el contexto de crisis económica y desempleo prolongado, el agotamiento de algunos subsidios públicos igualmente ha producido un encarecimiento generalizado de estos costes para las familias (Escobedo *et al.*, 2014). Por otro lado, las situaciones de desempleo o los vínculos más precarios que estos hogares tienen con el mercado de trabajo han supuesto una barrera para la utilización de los recursos públicos de educación y conciliación. En este aspecto cabe

recordar que los baremos de acceso a las escuelas infantiles públicas fijados por las Comunidades Autónomas –a excepción del País Vasco- otorgan más puntos cuando los dos progenitores están en situación de alta laboral en el momento de la solicitud, mientras que se toman en cuenta en menor medida otros criterios como la proximidad del centro a la residencia del menor o la existencia de hermanos escolarizados en la misma escuela.

Por lo tanto, cuando el trabajo de los dos progenitores está correlacionado con un mayor nivel de ingresos familiares y los empleos más inestables o aquellas actividades laborales sin un reconocimiento contractual tienen una mayor presencia en los hogares más desfavorecidos, el riesgo a no tener garantizada una plaza pública en caso de exceso de demanda se incrementa de manera muy considerable (Felgueroso, 2012). Esta situación es bastante frecuente en el contexto español, donde la oferta de plazas públicas en el ciclo 0-2 años es limitada (González, 2015). La alternativa a estas barreras de acceso a las plazas públicas es optar por otros recursos privados. Sin embargo, es factible que los costes de la escolarización privada no sean asumibles para estas familias, por lo que, en la mayoría de los casos, sus hijos e hijas se quedarían sin escolarizar.

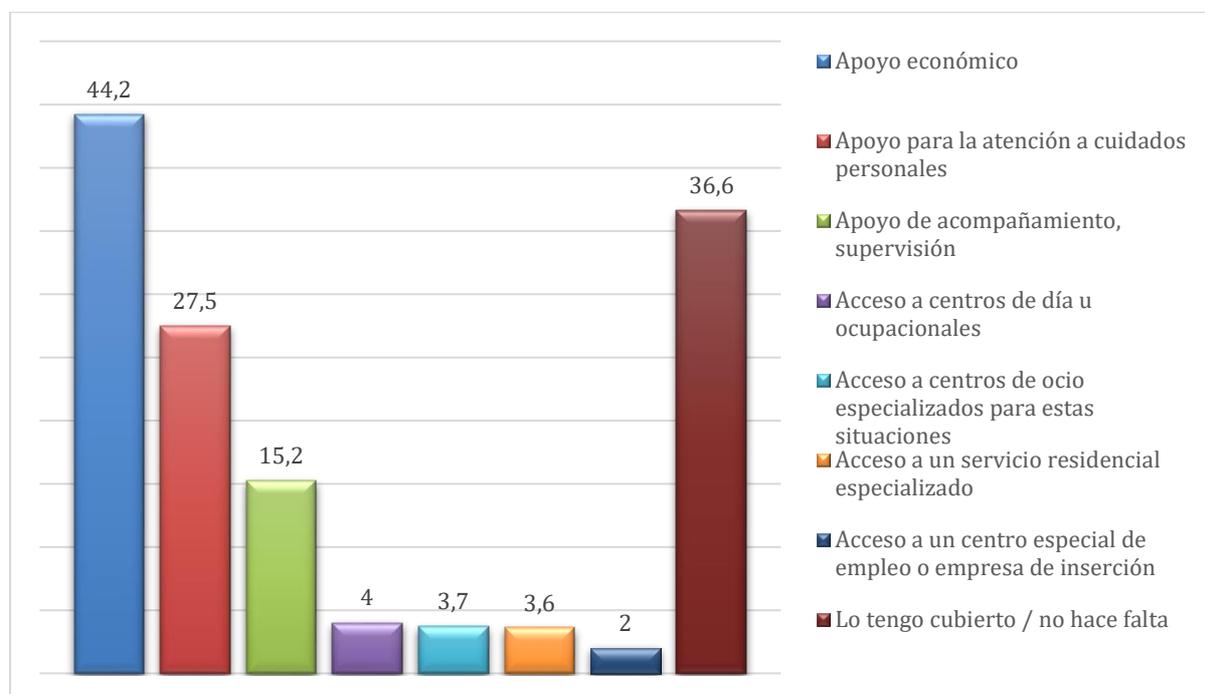
En definitiva, la crisis del empleo y la vulnerabilidad económica de muchas familias pueden derivar en situaciones de privación importantes para los menores en las etapas más claves para su desarrollo evolutivo. Los enfoques de inversión en la infancia o predistribución defienden la importancia de apoyar la crianza en los primeros años de vida (Mari-Klose y Mari-Klose, 2017). Ello es especialmente importante en los hogares más desfavorecidos, donde sus condiciones de vida precarias no solo dan lugar a entornos de crianza más inestables y con menor tiempo familiar de acompañamiento. Cabe recordar que ya en 2009 tras el primer impacto de la crisis, el 10,9% de los hogares necesitaron buscar ingresos complementarios a su empleo principal y el 13,5% vio aumentada su jornada laboral como consecuencia de la precarización de sus condiciones laborales (Martínez Virto, 2014). Como resultado de ello, ya en aquellos años se observaba un menor tiempo de acompañamiento familiar debido a largas jornadas de trabajo, lo cual suponía menor tiempo de crianza, menos acompañamiento en la realización de tareas escolares y una mayor exposición al conflicto social; todos ellos aspectos clave para el desarrollo evolutivo y educativo de los menores (Flores, 2016).

Las privaciones vinculadas con el cuidado y crianza a menores, sobre el total de hogares para el año 2018, registran apoyo económico insuficiente (25,6%) y una necesidad tres veces menor de apoyo familiar para la crianza (7,2%), orientación en la crianza y educación de los hijos e hijas (6,1%), acceso a centros educativos de educación infantil (0-2) (5,6%) y apoyo escolar en la educación obligatoria (4,3%). En cambio, la privación de apoyo para hacer frente a la crianza de niños con alguna deficiencia o discapacidad es relativamente más escasa (1,7%).

Por su parte, los cuidados a personas en situación de dependencia también continúan recayendo en las familias, suponiendo, como hemos visto, una barrera para el acceso al empleo de muchas mujeres. La encuesta FOESSA 2018 señala que el 44,2% de los hogares con personas dependientes presentan dificultades de aspecto económico para hacer frente a estos cuidados. Del mismo modo, casi tres de cada diez hogares (27,5%) necesitan apoyo para la gestión de los cuidados y el 15,2% acompañamiento y supervisión. Por el contrario, las necesidades vinculadas servicios de cuidado externos como centros de día, centros de

ocio, servicios residenciales o centros especiales de empleo escasamente alcanzan entre el 4-2%, respectivamente, de los hogares de la muestra. Esta gráfica resulta muy significativa de estas necesidades.

Gráfico 8. Privación de apoyo o ayuda para hacer frente la atención de las personas con limitaciones para la vida diaria



Fuente: EINSFF 2018 (% sobre el total de hogares)

Las hipótesis sobre cuáles son los motivos de estas estrategias de cuidado pueden ser varias. Por un lado, la carestía de los cuidados externos es para muchos hogares una barrera infranqueable. Sin embargo, resulta difícil de entender en algunos servicios como en el SAD, donde las tasas se ajustan a las situaciones económicas de las familias. En este caso quizá estamos ante un recurso que presenta limitaciones para los cuidados en el entorno de personas dependientes. Como se puede observar en la siguiente tabla, los recursos de cuidado profesional contratados de manera privada superan la presencia de Servicios de Ayuda a Domicilio Público (8% frente a 6,9%). Por el contrario, son las personas familiares quienes en mayor medida asumen ese cuidado, suponiendo en total la mitad de las casuísticas de la muestra. No obstante, resulta reseñable observar cómo el 35,8% de los hogares con personas dependientes no recibe ayuda para los cuidados, una cuestión sin duda que pone de manifiesto la limitada cobertura del mapa de recursos de cuidados.

Tabla 18. Ayuda para el cuidado de las personas dependientes

No recibe ayuda	35,8
Miembro del hogar	35,5
Familiar no conviviente	20,5
Amigos o vecinos	3,7
Servicio de ayuda a domicilio público (contratado por la administración)	6,9
Servicio de ayuda a domicilio o persona empleada de hogar contratada particularmente	8,0
Servicio de tele-asistencia	1,3
Persona voluntaria de una organización o asociación	0,4

Fuente: EINSFOESSA 2018 (% sobre el total de hogares)

En resumen, la encuesta pone sobre la mesa fuertes obstáculos para la autonomía de las mujeres. Como vemos, las estrategias de cuidado siguen siendo muy familistas y recaen esencialmente sobre las mujeres de las familias. No obstante, son las mujeres con menos recursos económicos y sociales quienes presentan la mayor vulnerabilidad debido a contar con escasas oportunidades de superar las barreras de cuidado y lograr una mejor incorporación en el mercado laboral. En efecto, se desprende una acumulación de desventajas o un “efecto Mateo” (Merton, 1968) tanto desde la perspectiva social como desde la perspectiva de género, por lo que se refuerza el riesgo de dependencia económica y pobreza en las mujeres con escasos recursos. La relación directa de ello en la crianza y la promoción educativa de los menores se acerca a otras experiencias de vulnerabilidad constatadas a lo largo del análisis, en las cuales la acumulación de dificultades, concatenación de efectos en la crisis y la ausencia de soportes les alejan de las situaciones de integración y seguridad.

4. Conclusiones. ¿Qué retos para las políticas sociales? Estrategias para el fortalecimiento de las familias tras la crisis

La identificación de perfiles y factores de riesgo es clave para trazar acciones de prevención y superación de las situaciones de debilidad que presentan los hogares más vulnerables. Mediante el análisis presentado se comprueba que los diez años de crisis económica han dejado fuertes cicatrices en los hogares. Solo dos de cada diez hogares en España han visto que la recuperación económica llegue a sus hogares. Entre ellos, destacan aquellos que cuentan con, al menos, dos adultos en el hogar, mientras que son los hogares unipersonales, monoparentales y con personas dependientes aquellos que menos han sentido la recuperación.

En general, los datos constatan que las necesidades de las familias se mantienen, sobre todo, en los ámbitos de alimentación, salud y ocio. Concretamente, resultan muy significativos dos resultados estrechamente relacionados con la salud de las familias. Por un lado, que uno de cada diez hogares no pueda llevar una dieta adecuada; el doble que en el año 2009. Por otro lado, que algunas privaciones relacionadas con la salud se relacionan con barreras económicas y administrativas que impiden el ejercicio del derecho básico a la atención sanitaria. Entre estos supuestos destacan aquellas personas que no pueden enfrentar los

gastos de traslado para acudir a las consultas especializadas o que no pueden comprar los medicamentos. Esta realidad afecta a dos de cada cuatro hogares severos y a uno de cada cuatro hogares moderados o precarios. Todas las necesidades relacionadas con la salud se multiplican entre las familias extranjeras o de etnia gitana. El 60% de estos hogares sufre alguna privación básica y el 73% presenta privaciones relacionadas con la salud.

Como resultado, las estrategias familiares se mantienen, sobre todo, las relacionadas con el ajuste de gasto o la solicitud de ayuda a instituciones o relaciones sociales. En total, cuatro de cada diez hogares ajustan el gasto en ocio, dos de cada diez necesitan pedir ayuda a sus redes sociales y uno de cada diez busca el apoyo en instituciones.

Los primeros análisis sobre el impacto de la crisis en 2009 constataban los riesgos que las situaciones de dificultad prolongada tenían en las familias. Los procesos de deterioro de la salud y la convivencia familiar marcan el presente, y futuro, de los hogares vulnerables. Algunas de las situaciones de deterioro más reseñables se vinculan con el aumento de la obesidad en las familias más desfavorecidas, la presencia de trastornos mentales en los hogares excluidos o el consumo de drogas o alcohol en las familias afectadas por el desempleo, entre otras. Este deterioro se extiende a todos los miembros de la unidad familiar, abriendo fuertes procesos de exclusión entre los menores de edad.

Del mismo modo, la pérdida de relaciones sociales en la crisis es un hecho señalado por el 10,8% de los hogares encuestados; un dato tres veces mayor a lo manifestado en 2009. Esta pérdida de relaciones es especialmente intensa en los hogares precarios o en exclusión. En concreto, la ausencia de relaciones con familiares no convivientes se multiplica por cinco en los hogares en situación de exclusión severa con respecto a su incidencia sobre el total de la muestra, y de cada diez hogares en aislamiento social, cuatro son hogares en integración precaria o exclusión severa. La presencia de los hogares precarios entre aquellos en conflicto o aislamiento social ha tenido un aumento muy reseñable en los últimos años. En los hogares en conflicto social, los precarios superan en 8 puntos a los grupos en exclusión moderada y en el caso de aislamiento social suponen seis de cada diez. Ambas evidencias ponen sobre la mesa los costes de la crisis y el deterioro de las condiciones de vida en los espacios de integración precaria.

El deterioro de la capacidad de resistencia de las familias tras una larga crisis se observa también en la ayuda externa que reciben. La tasa de hogares que no tienen ayuda cuando la necesitan va en aumento, y ha alcanzado al 27,7% de las familias encuestadas. Entre estos hogares no encontramos familias integradas plenamente, sino que son fundamentalmente aquellas en situación precaria, de exclusión moderada o de exclusión severa quienes manifiestan esta realidad. Entre aquellos hogares que disponen de ayuda, siguen predominando las formas de relación mutua. Sin embargo, en este año 2018, el 22% de los hogares precarios ni dan ni reciben ayuda (22%), un dato que supera la media total y que acerca a estas familias a los niveles de vulnerabilidad de las familias en exclusión más severa. Además del apoyo familiar, tanto las prestaciones y servicios sociales como otras entidades y ayudas de carácter urgente han sido importantes soportes de los procesos de exclusión. La extensión de la crisis ha puesto de manifiesto los límites de los sistemas de garantía de rentas. En el caso de los hogares precarios, cuatro de cada diez han tenido prestación, pero ya la han agotado y dentro de los excluidos severos casi seis de cada diez no tienen prestación porque la han agotado, les ha sido denegada o están en espera de resolución.

Ante estas situaciones de urgencia, los servicios sociales son, para el 60% de la muestra, la primera opción de ayuda a la que acuden. Les siguen también algunas entidades sociales como Cáritas, que supone la primera opción para el 17,6% de los hogares.

Por último, los entornos de cuidado y crianza familiar también constatan fuertes debilidades para la promoción de las familias. Los resultados en materia de cuidado y conciliación en este espacio resultan alarmantes. Al desagregar por sexo los datos vemos que los cuidados, en general, se manifiestan como una barrera de acceso al empleo cinco veces mayor en las mujeres que en los hombres. En el caso de los cuidados a menores, la proporción de mujeres es catorce veces mayor que la de los hombres (93,7% frente a 6,3%). Para luchar contra ello, los recursos de cuidado y conciliación son indispensables. Sin embargo, según los datos de la encuesta, el 13,2% de los menores nacidos en la crisis no han acudido a la guardería por razones económicas, y buena parte de las familias reclaman orientación para la crianza de los menores. En relación con las personas dependientes, también los cuidados recaen en las familias, mientras que los recursos de apoyo público en el entorno tienen una incidencia más reducida.

En definitiva, los procesos de exclusión han sido intensos en aquellos espacios de precariedad y exclusión, y su evolución constata tres resultados importantes: la cronificación de una buena parte de los hogares en exclusión severa, el deterioro de las condiciones de vida de aquellas familias que se enfrentan a la precariedad y la pérdida de capacidad de resistencia de las familias por procesos de deterioro en salud, educación y crianza o relaciones sociales. En este contexto, las políticas sociales se enfrentan a fuertes desafíos. Se destacan tres de ellos.

En primer lugar, las diferencias entre grupos sociales se han hecho más grandes y complejas, tanto desde la precariedad hasta la exclusión severa más enquistada. La prevención en esta línea es clave. Las políticas de garantía de renta son soportes indispensables para frenar procesos de exclusión, pero también otras acciones vinculadas al cuidado de las redes familiares, superación de privación en salud o prevención del conflicto en las familias. Por otro lado, la ausencia de oportunidades de incorporación para los colectivos más excluidos también resulta una amenaza a las sociedades cohesionadas. En este sentido, las políticas de incorporación social que ofrezcan, de nuevo, una oportunidad de inclusión, serán indispensables. Algunos colectivos tradicionalmente vinculados a estas situaciones de exclusión social más severa siguen mostrando fuertes situaciones de exclusión en ámbitos como la salud, la educación o la vivienda, por lo que la perspectiva intercultural y de clase deberá ser parte en estas políticas de inclusión social.

En segundo lugar, si bien los hogares encabezados por varones superan ligeramente a las mujeres sustentadoras en la muestra de hogares, las situaciones más vulnerables vinculadas con la privación, exclusión o barreras de acceso al empleo, crianza o violencia continúan siendo femeninas. Como resultado, las políticas de refuerzo de las familias deben incorporar la perspectiva de género al reconocer la mayor vulnerabilidad de las mujeres, la sobrecarga en las tareas de cuidado y las barreras para el acceso y mantenimiento del empleo. Por ello, para promover una mayor autonomía de las familias es necesario hablar de políticas de emancipación de las mujeres mediante acciones de conciliación, recursos de cuidado o medidas de lucha contra la discriminación laboral.

Por último, la crisis ha dejado fuertes cicatrices en muchas familias, pero muchos de estos costes todavía estarán presentes en el futuro. Los hogares afectados por la exclusión y la precariedad presentan dificultades para la sostenibilidad de sus familias. La incertidumbre laboral, el desempleo de larga duración y la pobreza tienen consecuencias en el bienestar de todos los miembros de una familia, pero estas se intensifican en el caso de los menores. A modo de ejemplo, la tasa de obesidad entre los menores de clase baja es el triple que la de aquellos de clase alta, mientras que, en adultos, la diferencia es del doble. Es por ello que las familias encuentran barreras económicas, de capacitación y acompañamiento en el cuidado de menores o personas dependientes que además de ser un obstáculo para la emancipación de las mujeres, también lo es para la promoción de sus familias. Los enfoques de inversión temprana en infancia subrayan la importancia de los centros 0-3 años, el acompañamiento y capacitación para la crianza, el apoyo a la promoción educativa de los menores de entornos desfavorecidos y, especialmente, la estabilidad económica en las familias. Ello acoge distintos objetivos en el corto y medio plazo relacionados con el bienestar de los menores, la ausencia de privaciones o su desarrollo educativo. Pero en el largo plazo estas políticas permitirán romper con círculos de pobreza heredada. Por ello, también las políticas de atención a la infancia, promoción de su desarrollo educativo, cuidado en el entorno y el apoyo a las familias más vulnerables en los procesos de crianza se erigen como fuertes desafíos para las políticas sociales.

5. Referencias bibliográficas

- Choi de Mendizabal, A. y Calero, J. (2013). Determinantes del riesgo de fracaso escolar en España en PISA-2009 y propuestas de reforma, *Revista de Educación*, 362:562-593.
- Dominguez-Folgueras, M. (2015). Parentalidad y división del trabajo doméstico en España, 2002-2010. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 149 (1): 45-62.
- Escobedo, A., Meil, G. Lapuerta, I. (2014) "Spain Country Note". En P. Moss (ed.): *International Review of Leave Policies and Research*, 277-290. [Disponible en: http://www.leavenetwork.org/lp_and_r_reports/ Consultado: 18/12/2015]
- Felgueroso, F. (2012) "Recortes Educativos y responsabilidad fiscal: la escuela infantil. Planeta Euskadi", blog Nada Es Gratis, 11 de mayo de 2012.
- Flores Martos, R. (2016) (coord.). La transmisión intergeneracional de la pobreza: factores, procesos y propuestas para la intervención. Madrid: Fundación Foessa. Disponible en: <http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/5250/transmisi%C3%B3n%20intergeneracional%20pobreza.pdf>
- Gálvez, L. (2013). Una lectura feminista del austericidio. *Revista de economía crítica*, 15: 80-110
- González, M. J. (2015) "Padres primerizos en tiempos de crisis". En González, M.J. y Jurado-Guerrero, T. (Eds.). *Padres y madres corresponsables. Una utopía real*. Madrid: La Catarata.
- González, M. J. y Jurado Guerrero, T. (2009). ¿Cuándo se implican los hombres en las tareas domésticas? Un análisis de la Encuesta de Empleo del Tiempo. *Panorama Social*, (10), 65-81.

- INE (2018). Datos para el informe INE Mujeres y hombres en España. Disponible http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INEPublicacion_C&cid=1259924822888&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout¶m1=PYSDetalleGratuitas¶m2=1259925478504¶m4=Mostrar
- Lasheras, R.; Martínez-Virto, L.; Azcona, P. (2012). Condiciones de vida, estrategias e itinerarios de exclusión de los hogares en Navarra. En Corera, C.; Laparra, M.; Pérez-Erasmus, B. (coord.) *Informe sobre el impacto de la crisis en los hogares en situación de exclusión en Navarra*. Traficantes de sueños. Villatuerta: Gráficas Lizarra.
- Martínez Virto, L. (2014). *Sobreviviendo a la crisis: estrategias de los hogares en dificultad*. Barcelona: Ediciones Bellaterra. ISBN-13: 978-84-7290-662-4
- Marí-Klose, P.; Marí-Klose, M. (2017). “Políticas contra la pobreza infantil en el relato predistributivo”. En (Zalakain, J. y Barragué, B.) *Repensar las políticas sociales: predistribución e inversión social*. ISBN 978-84-946059-2-5, págs. 45-68.
- Merton, R. K. (1968). “The Mathew Effect in Science”. *Science*, 159 (3810): 56-63.